

Agosto 31 de 1939

35ª REUNION — Continuación de la 32ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los señores Juan G. Kaiser y Carlos A. Pita

MINISTRO PRESENTE:

de Agricultura,
Ingeniero José Padilla;

DIPUTADOS PRESENTES:

Acuña, Aurelio S.
Aguiar, Henoch D.
Aguirre Cámara, José
Agulla, Juan Carlos
Allperín, Samuel
Anastasi, Leonidas
Araujo, Eduardo
Arbeletche, Anibal P.
Arias Uriburu, Juan
Astesiano, Carmelo I.
Barceló, Alberto
Barrau, José
Basualdo, Honorio
Beiró, Angel Francisco
Beristain, Francisco
Bertotto, José G.
Boatti, Ernesto C.
Busaniche, Julio A.
Busignani, Mario
Caiferata, Juan F.
Cantilo, José Luis
Cappellini, Luis E.
Carús, Agustín J.
Carreras, Ernesto L. de las
Castex, I. Mario
Cisneros, Carlos E.
Cooke, Juan I.
Cordero, Octavio
Courel, Carlos D.
Damonte Taborda, Raúl
De Miguel, Benito
Díaz, Raúl
Dickmann, Enrique
Eyto, Francisco F.
Fassi, Santiago Carlos

Fazio Rojas, Lorenzo
Garona, Juan A.
Ghioldi, Américo
Godoy, Raúl
Gómez Grandoli, Clemente
Gómez Rincón, Abel
González, Benjamín S.
Grisolia, Luis
Güerci, José María
Guerrero, José Rafael
Guglielmelli, Aquiles M.
Hardoy, Emilio J.
Hernández, Clodomiro
Hernández, Víctor
Horne, Bernardino
Infante, Faustino
Irigoyen, Carlos
Iriondo, Urbano de
Jaramillo, José María
Kaiser, Juan G.
Labayen, Juan
Lanús, Adolfo
Lazo, Plácido C.
Lezica Alvear, Florencio
Lima, Vicente Solano
López, Héctor S.
López García, Francisco
López Merino, Ismael
Maino, Alejandro
Martínez, Benito F.
Martínez, Gregorio N.
Medina, Justo G.
Méndez Calzada, Joaquín
Montagna, Carlos P.
Moreno, Ricardo A.
Mugica, Adolfo
Noel, Martín
Noel, Carlos M.
Onsari, Fabián
O'Reilly, Guillermo R.

Ortiz Basualdo, Samuel
Ortiz de Zárate, Miguel
Osoreo Soler, Manuel E.
Oserio, Miguel
Pagano, David J.
Palacio, Benjamín
Pandolfo, Pío
Pastor, Reynaldo A.
Paz, Eduardo
Paz Posse, Ramón D.
Peco, José
Peña, Solano
Pérez, Deolindo
Piedrabuena, Carmelo P.
Pinto, Manuel (h.)
Pita, Carlos A.
Pizarro, Néstor A.
Prat Gay, Fernando de
Quintana, Fenelón
Ravignani, Emilio
Repetto, Nicolás
Reyna, Rodolfo
Rocha, Justo V.
Ruggieri, Silvio L.
Saccone, Romeo D.
Sáenz, Mario
Sammartino, Ernesto
Sancerni Giménez, Julián
Sánchez, Adolfo B.
Schoo Lastra, Dionisio
Simón Padrós, J.
Solá, Juan E.
Solana, J. Félix
Solari, Juan Antonio
Soldano, Arquímedes A. E.
Solís, Rogelio J.
Susan, José C.
Tamborini, José P.
Vásquez, Juan Carlos
Vélez, Francisco M.
Videla Dorna, Daniel
Vilchez, Martín
Vilgré La Madrid, Juan

Zara, Edmundo Leopoldo
Zavala Ortiz, Teobaldo
Zunino, Marcelo A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

Alsina, Juan José
Alvarez Colodrero, Carlos
Biancofiore, Rafael
Cabral, Humberto
Devoto Acosta, Alcibiades
Duffy, Eduardo N.
Ferreira, Antenor R.
Figueroa, Julio A.
Pinto, Manuel (h.)
Martínez, Manuel
Siri, Obdulio F.
Soto, Pedro Numa
Urien, Enrique César

AUSENTE, CON AVISO:

Amadeo y Videla, Daniel (h.)
Barrionuevo, Gerardo
Izurieta Fourquet, Agustín
Morrogh Bernard, Juan P.
Radio, Pedro
Solari, Felipe C.
Tapia, Numa

AUSENTES, SIN AVISO:

Boero, Albino
Castro Frediani, Manuel L.
Eberlé, Enrique
Grassi, Alfredo
Illanes, Eloy J.
Jiménez, Mario
Martínez, F. Benigno
Muniagurria, Walter Julio
Peña, Ernesto S.
Saá, Alberto
Teisairé, Eduardo (h.)

SUMARIO

- 1.—Indicación, del señor diputado Gómez Rincón, para que los asuntos entrados sean girados directamente a las comisiones respectivas. Es aprobada.
- 2.—Asuntos entrados:
 - I.—Comunicaciones del Honorable Senado.
 - II.—Comunicaciones oficiales.

- III.—Comunicaciones de comisión.
- IV.—Despacho de comisión.
- V.—Peticiones particulares.
- VI.—Proyecto de ley, del señor diputado Eyto, sobre edificio para la Escuela Industrial de Pesca, en Mar del Plata.
- VII.—Proyecto de ley, del señor diputado Caiferata, sobre estudios para la construcción de una represa en el cauce del río Tercero.

- VIII.—Proyecto de ley, de los señores diputados Pita y Lazo, sobre creación del Instituto de investigaciones hidráulicas en la Facultad de Ingeniería, de Rosario.
- IX.—Proyecto de ley, del señor diputado Reyna y otros, sobre modificación de los artículos 12 y 13 de las leyes números 10.650 y 11.173, de Hogar Ferroviario.
- X.—Proyecto de ley, del señor diputado Ruggieri y otros, sobre substitución de los artículos 9º, 10, 84 y 85 de la ley número 2.393, de matrimonio civil.
- XI.—Proyecto de ley, de los señores diputados Eyto y Garona, sobre subsidio a la Institución Cultural Argentina.
- XII.—Proyecto de ley, del señor diputado Horne y otros, sobre derechos políticos de la mujer.
- XIII.—Proyecto de ley, del señor diputado Lanús y otros, sobre transformación de cultivos antieconómicos en las provincias de La Rioja y Catamarca.
- XIV.—Proyecto de ley, del señor diputado Dickmann, sobre instalación, conservación y funcionamiento de calefacción en las escuelas primarias de la Capital Federal.
- XV.—Proyecto de ley, del señor diputado Zara y otros, sobre pensión a la señora Evangelina Carozzi de Leguizamón.
- XVI.—Proyecto de ley, del señor diputado Ortiz de Zárate, sobre pensión a la señora Cristina Velazco de López y a su hija Dolores Rosa.
- XVII.—Proyecto de ley, del señor diputado Guglielmelli, sobre aumento de pensión a la señora Ana Febre de Antequeda.
- XVIII.—Proyecto de ley, del señor diputado Bertotto, sobre subsidio al hospital de Las Rosas (Santa Fe).
- XIX.—Proyecto de ley, del señor diputado Pagano y otros, sobre creación de una escuela de oficios en Laguna Paiva (Santa Fe).
- XX.—Proyecto de ley, del señor diputado Pagano y otros, incorporando a la planilla C. de la ley número 12.576, un subsidio a la Comisión pro Templo, de Colonia Elia (Santa Fe).
- XXI.—Proyecto de ley, del señor diputado Alsina y otros, por el que se crea la ciudad universitaria dentro de la organización de la Universidad Nacional, de La Plata.
- XXII.—Proyecto de ley, del señor diputado Aguiar sobre pensión a la señora María Teresa Vázquez de Novoa de Monguillot.
- XXIII.—Proyecto de ley, de los señores diputados Pita y Lazo, sobre subsidio al Círculo de Obreros, de Rosario.
- XXIV.—Proyecto de ley, del señor diputado Hernández (C.) y otros, sobre creación de un colegio nacional en la ciudad de Bell Ville (Córdoba).
- XXV.—Proyecto de ley, del señor diputado Gómez Grandoli y otros, sobre ampliación de la colonia para empleados nacionales que funciona en embalse del río Tercero (Córdoba).
- XXVI.—Proyecto de ley, del señor diputado Gómez Rincón y otros, sobre adquisición de seis camiones sanitarios para la Dirección Antipalúdica, dependiente del Departamento Nacional de Higiene.
- XXVII.—Proyecto de ley del señor diputado Paz y otros, sobre creación de una escuela de agricultura en el departamento de Tucumán.
- XXVIII.—Proyecto de ley, del señor diputado Noel (M.), sobre subsidio al Club de Gimnasia y Tiro, de Salta, para construcción de su edificio.
- XXIX.—Proyecto de ley, del señor diputado Beristain y otros, sobre ampliación de la partida 11 del inciso 414, del anexo E, del presupuesto general de gastos para el año 1939.
- XXX.—Proyecto de ley, del señor diputado Sancier Giménez, sobre pensión a la señorita María Luisa Lacasa.
- 3.—Orden de la labor.
- 4.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Legislación Agraria, sobre creación del consejo nacional de colonización.

—En Buenos Aires, a treinta y un días del mes de agosto del año 1939, siendo la hora 15 y 59:

1

INDICACION

Sr. Presidente (Kaiser). — Continúa la sesión con 83 señores diputados en el recinto.

Sr. Gómez Rincón. — Pido la palabra.

Propongo que se autorice a la Presidencia a dar el destino que corresponda a los asuntos entrados, para contribuir de ese modo a la normalización del trabajo de la Cámara.

Sr. Ruggieri. — ¿Se refiere a los que deben destinarse a comisión?

La Presidencia dijo que no obstaba que el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo fueran girados a la comisión para que el señor diputado, en la próxima sesión, hiciera la cuestión reglamentaria que él anticipaba que iba a plantear. Pero un hecho nuevo se produjo, porque la sesión de la Cámara no fué levantada, sino que, a moción de no recuerdo qué diputado, se pasó a cuarto intermedio. De manera que esta reunión es sólo continuación de la sesión anterior. Podrá, pues, hacerlo en otra sesión, salvo que la Cámara resuelva expresamente lo contrario en este momento.

Sr. Pinto (h.). — ¿Si me permite el señor diputado?

Reglamentariamente, la advertencia que ha formulado el señor presidente es rigurosamente exacta.

En la sesión anterior se pasó a cuarto intermedio y no cabe duda que el asunto que debe discutirse en la ley de colonización; pero en la sesión anterior el diputado que habla pretendió advertir a la Honorable Cámara sobre la situación especial de la ley nacional de instrucción pública en sus relaciones con la ley básica de instrucción secundaria y especial, como la denomina el proyecto del Poder Ejecutivo y que remitiera a la Comisión de Presupuesto. De tal suerte, señores diputados, que me hallo en la obligación de plantear el asunto con la urgencia que el caso requiere; pero si la Cámara entiende que esto obstruiría la labor de este cuerpo, una correcta educación parlamentaria me aconseja no pretender que la Cámara modifique el reglamento por circunstancias especiales. Entiendo que una simple consulta de la Presidencia podría determinar un movimiento de la Cámara para permitirme plantear la cuestión; pero si hay inconveniente reglamentario, no pongo ningún obstáculo —no es cuestión de vanidad— en presentar mañana esta cuestión, pues creo que entonces no habrá impedimento de orden reglamentario.

Creo que con estas palabras queda aclarada mi posición en el asunto, y plantearemos —y digo plantearemos, porque en cierta manera algunos miembros de la Comisión de Instrucción Pública también creen procedente la cuestión— el asunto en la sesión de mañana. Y con esto se ofrece también un ejemplo de respeto y de acatamiento a las normas reglamentarias. (*¡Muy bien!*)

Sr. Solari (J. A.). — Conviene recordar que las sesiones de los viernes están destinadas a tratar los proyectos de resolución.

4

COLONIZACION NACIONAL

Sr. Presidente (Kaiser). — Continúa en consideración el artículo 18 del despacho sobre creación del consejo nacional agrario.

Sr. Ravignani. — Entiendo que quedó acordado que artículo que no se observe se dé por aprobado.

Sr. Presidente (Kaiser). — Efectivamente.

—Se da por aprobado el artículo 18.

—En diseusión el artículo 19:

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

Desearía que la comisión me aclarara tres conceptos que aparecen en este artículo. Comienza por establecer que los bancos de Estado están obligados a «ceder» al consejo agrario; un poco más adelante habla de que los inmuebles que de esta manera «se adjudique el consejo»; y después habla de «hipoteca a favor del vendedor». Desearía saber si se trata de tres formas jurídicas distintas o si en realidad son idénticas, para en ese caso unificar la terminología del artículo.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Antes desearía formular otras preguntas al señor miembro informante, para que así las conteste de una sola vez.

Sr. Presidente (Kaiser). — Tiene la palabra el señor diputado.

Sr. Guillot. — El señor diputado Ravignani ha formulado preguntas relativas al artículo 19 sobre puntos que también habían motivado cierta preocupación del diputado que habla. A las preguntas que ha formulado el señor diputado, yo agregaría la siguiente: si la comisión considera que los bancos de Estado, a que se refiere el artículo 19, y que operan dentro de un régimen de naturaleza especial, pueden ser obligados por una disposición de esta naturaleza a ceder las tierras que posean y en las condiciones que aquí se determinan, es decir, si están obligados a aceptar en pago el 1 % de amortización acumulativa y el 3 % de interés. Tratándose de bancos como el de la Nación, que no son bancos colonizadores, sino que se han adjudicado propiedades en razón de que eran garantías reales de préstamos anteriores, ¿puede establecerse que esas tierras pasen, por una simple disposición legal, al consejo nacional agrario?

Y, finalmente, la cuestión de la hipoteca también crea un problema que convendría fuera

esclarecido por la comisión. Parece que va a haber un juego de hipotecas un poco complicado, que tal vez dificulte el traspaso de estos bienes, siempre que pueda hacerse dentro del sistema creado por este artículo. Porque el consejo nacional agrario, para adquirir, debe constituir una hipoteca a favor de la institución enajenante, y después el adquirente debe constituir hipoteca a favor del consejo nacional agrario, y pasado cierto tiempo y cubierto hasta el 50 % del precio de venta, el colono vuelve a ser deudor del Banco Hipotecario, constituyendo a su vez nueva hipoteca.

No olvidemos, señor presidente, que en instituciones como el Banco Hipotecario estas tierras están adquiridas dentro de un régimen especial y el precio se amortiza en un número determinado de años.

De manera que yo quisiera saber, no con el ánimo de perturbar a los miembros de la comisión, sino para conseguir un esclarecimiento destinado a facilitar la aplicación futura de la ley, si todos estos aspectos han sido considerados y tienen solución clara y precisa en el pensamiento de la comisión.

Sr. Barrau. — Pido la palabra.

Voy a hablar sobre el artículo 19, en oportunidad de las manifestaciones del señor diputado por la Capital, a fin de que el señor miembro informante, al contestar, pueda contemplar un aspecto que es interesante.

El artículo 19 comprende tres conceptos. Paso por alto el concepto económico que la comisión habrá contemplado, desde luego, y que se refiere al hecho de que estas propiedades han sido adjudicadas a los acreedores a precios altos en relación a los precios normales del momento en que se produjo la adjudicación. Como esta ley va a ser permanente, en su oportunidad muy rara vez podrá presentarse el caso de su aplicación en la primera parte del artículo.

Tampoco voy a hacer cuestión en cuanto a los plazos de pago, punto ya contemplado en el artículo 18 en su aspecto general, lo haré, sí, en la parte especial que considera este artículo.

Pero hay un punto que para mí es importante y que creo debe ser considerado por la Cámara: es el caso de las propiedades que, estando afectadas a hipotecas del Banco Hipotecario, fueron adjudicadas a éste. En virtud de una ley especial, número 11.720, se amplió el plazo para que el Banco Hipotecario cancelara hipotecas sobre estos inmuebles que se adjudicó, y la ley número 12.544, de moratoria hipotecaria, en su artículo 27, amplió a diez años

el plazo para que el Banco cancele las hipotecas sobre las propiedades que se han adjudicado.

De manera que se van a presentar en este intervalo de tiempo, situaciones de propiedades que tienen todavía el gravamen vigente, y el Banco no podría entonces hacer una nueva hipoteca directa a su favor, sin la previa cancelación.

Pido a la comisión quiera contemplar este aspecto, como también el relativo a la forma de pago. Dice: «serán pagados en anualidades vencidas con amortización acumulativa del 1 % e interés del 3 %, constituyendo hipoteca a favor del vendedor». Pediría a la comisión que suprima esta forma de pago, para que el pago pueda estar condicionado, ya sea con el préstamo hipotecario primitivo, siguiendo el régimen de amortización correspondiente, o bien con este que establece la comisión, u otro que se fije como más conveniente en el momento de la operación.

En concreto, entonces, pido se suprima del último párrafo las palabras «del 1 % e interés del 3 %», y que después de la palabra «constituyendo» se agregue «o transfiriendo». Así podría funcionar la ley dentro de un concepto orgánico, pero también, de acuerdo con el articulado de las leyes números 11.720 y 12.544, sin obligar a que se haga la cancelación con el desembolso y quebranto que significaría para el Banco, o para el consejo agrario, que tendría que hacer una descapitalización inmediata, si no se facultara la transferencia de la hipoteca.

Es lo que plantea la comisión.

Sr. Presidente (Kaiser). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Palacio. — Con referencia a la observación formulada por el señor diputado por la Capital puedo decir que el concepto del artículo es de que el consejo agrario pueda realizar todas las propiedades que tienen las instituciones del Estado, ya sea que las adquiera por compra a esas instituciones o que en virtud de convenios le sean atribuidas en la forma que convengan.

Es por eso que el artículo se refiere a la cesión, comprendiéndose en este caso ya sea que se le haga la transferencia mediante el pago de precio o bien en cualquiera de las otras formas de contratar que existen en la ley civil.

En cuanto a la observación formulada por el señor diputado Guillot, el artículo se pone en el caso de que las propiedades de los bancos o instituciones del Estado sean puestas a disposición del consejo agrario. Entonces, el artículo establece que estas instituciones tomen

las garantías suficientes para que el consejo agrario pague el precio en virtud del cual se hace la transferencia de dichas propiedades y quiere el artículo que estas transferencias se hagan garantizando a la institución.

Agrega el artículo la obligación de los bancos o instituciones oficiales de hacer la cesión, porque parte de este punto de vista: los bancos tienen una cantidad de propiedades que las adquirieron de sus deudores y que por la forma en que evolucionan esas instituciones bancarias —llámeseles Banco de la Nación, Banco Hipotecario Nacional o Instituto Movilizador— se deshacen muy despaciosamente de ellas.

Esta ley tiene por objeto que el consejo agrario tome esos inmuebles y los entregue a la colonización dándoles las garantías suficientes para que por lo menos tales instituciones puedan recibir el importe del precio de adquisición.

Sr. Eyto. — ¿Me permite, señor diputado?

¿No chocaría esta redacción con lo expresado en el artículo 10 sobre adquisición de inmuebles?

Sr. Palacio. — No, señor diputado, porque se refiere a tierras de particulares.

En la forma como está redactado el artículo, evidentemente puede el consejo agrario adquirir las propiedades a un precio superior al que realmente han costado a los bancos.

Para ese caso voy a proponer un agregado al final del primer apartado, en forma por la cual se establezca que no podrá en ningún caso ese precio que pague el consejo agrario a los bancos ser superior al resultante de las normas establecidas por el artículo 20.

El artículo siguiente al que consideramos, establece las normas dentro de las cuales debe verificarse la adquisición de estas propiedades.

Sr. Guillot. — ¿Me permite, señor diputado?

Como las ventas del consejo agrario se rigen por otro artículo, según el cual, no puede vender al precio inferior de compra las tierras adquiridas al precio que fijan los bancos, el valor de éstas resultaría más alto que el de aquellas tierras obtenidas de otro modo; el agregado resuelve esa cuestión, pero en cambio, crea una dificultad nueva porque las instituciones agrarias acaso no estén en condiciones de ceder sin quebranto estos bienes adquiridos como garantía de préstamos hechos.

De todos modos, a los efectos que el señor diputado persigue, el agregado es, sin duda, aceptable y resuelve algunas de las dificultades

des aunque crearía otras nuevas con estas instituciones.

Sr. López Merino. — La forma imperativa en que está redactado el artículo 19 puede traer perturbaciones al desenvolvimiento financiero de las instituciones oficiales. Tal es el caso citado por el señor diputado Guillot del Banco Hipotecario que por cualquier circunstancia se haya adjudicado bienes de gran valor sobre los cuales tiene que hacer el servicio financiero del 4 y del 5 %, correspondiente a las cédulas emitidas por el préstamo originario y se le obliga aquí a recibir un 3 % de interés, produciendo un desequilibrio en sus finanzas. Como esta situación —el mismo miembro informante acaba de reconocerlo— puede traer perturbaciones, creo que se solucionaría quitándole al artículo el carácter imperativo. Para ello podría decirse en lugar de que los bancos del Estado e instituciones de éste «estarán obligados a ceder al consejo agrario», lo siguiente: «podrán ceder», etcétera.

En esa forma se daría lugar a que se contemplasen las circunstancias de cada caso particular y que pudiera hacerse la operación o dejar de hacerse según fuera o no conveniente para el consejo agrario y para el Banco.

Dejo, pues, formulada la proposición de reemplazar las palabras referidas, a fin de quitar al artículo el carácter imperativo.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

El objeto del artículo es que los bancos cedan al consejo agrario, a los fines de su colonización, las propiedades en su poder. Muchas veces los bancos adquieren inmuebles y los conservan a la espera de un mayor precio. La ley trata de evitar que especulen con esos inmuebles y ordena que los transfieran al instituto colonizador.

Por esa razón la modificación que propone el señor diputado por la Capital, transformando en facultativa la disposición del artículo, no puede aceptarla la comisión.

Sr. López Merino. — Los bancos no tienen interés en conservar esas propiedades.

Sr. Palacio. — Sí, tienen.

Sr. López Merino. — Ni el Banco de la Nación ni el Banco Hipotecario tienen interés en conservar los inmuebles ingresados a su patrimonio.

Sr. Palacio. — De acuerdo con su carta orgánica deben liquidar las propiedades, pero en la realidad no ocurre así. Muchas veces los bancos retienen las propiedades para benefi-

ciarse con su valorización y esa circunstancia impediría su colonización.

Al informar en general, he presentado una planilla, que se incluyó en el Diario de Sesiones, en la que consta la enorme cantidad de tierras que tienen en este momento en su poder los bancos. De manera que la realidad es muy distinta al concepto que expresaba el señor diputado, y por ello el artículo trata de imponer a los bancos e instituciones oficiales la transferencia de los inmuebles.

En cuanto a la observación formulada por el señor diputado por la Capital, doctor Barrau, considero que da una mayor amplitud al artículo, y que puede ser aceptada. Con ello se permitiría que los pagos se efectuaran de acuerdo a la disposición del artículo o bien de acuerdo a las normas establecidas por el Banco Hipotecario.

Sr. Guerrero. — Pido la palabra.

Propongo a la comisión una modificación de forma. El artículo 19 dice: «los bancos del Estado o instituciones de éste», redacción que me parece un tanto ambigua. Me parece que sería más claro decir: «los bancos oficiales e instituciones del Estado».

Sr. Palacio. — Muy bien, señor diputado; la comisión acepta.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Esta breve discusión suscita una serie de cuestiones de fondo y de forma que conviene dilucidar.

En primer lugar, el artículo 19 se refiere a la obligación de los bancos de «ceder» al consejo agrario nacional las tierras y propiedades. Debemos cuidar que en la redacción de la ley se empleen los términos jurídicos en su verdadera acepción. Se ceden los derechos y acciones, pero no se cede el dominio. De manera que la palabra «ceder» debe ser reemplazada por «transferir».

La segunda cuestión, que es de gran importancia y debe quedar aclarada, es la siguiente: la tierra que adjudique el consejo agrario nacional lo será mediante un contrato que subsistirá hasta el momento en que se otorgue la escritura definitiva, convirtiendo la deuda con el consejo agrario en una deuda de cédulas hipotecarias en favor del Banco Hipotecario Nacional. Es útil dejar sentado este principio, porque de lo contrario, nos encontraríamos con que una serie de previsiones tendientes a asegurar la mejor explotación de los fundos no tendrían vida, porque desde el primer momento el adquirente de la tierra quedaría convertido en propietario por la unión de las tres condiciones

que, según el Código Civil, producen la traslación de la propiedad.

No habrá, pues, un doble juego de hipotecas. El Banco transferirá la tierra al consejo agrario nacional en las condiciones que vamos a establecer en este artículo y habrá un convenio entre el Banco y el consejo agrario, en cuya virtud se fijarán las obligaciones recíprocas. Pero el Banco, a su vez no entregará en propiedad esa tierra a los particulares, de inmediato, por el simple pago del 10 % mediante el otorgamiento de escritura pública. Entiendo que ése es el concepto. De lo contrario, todas las disposiciones del capítulo XIII sobre rescisión de contrato dejarían de tener efecto, porque si desde el primer momento se otorga un título traslativo de la propiedad, no nos encontraremos frente a una rescisión de contrato, sino frente a un caso de dominio revocable.

Otra aclaración necesaria es esta: en poder de los bancos se encuentran tierras cuyo precio de adjudicación al Banco es inferior al real; y, tal vez, caso muy raro, suceda también que el precio de adquisición sea superior al real. La comisión quiere establecer que si existen inmuebles cuyo precio real es superior al de adjudicación al Banco, el Banco debe transferirlos por ese precio de adjudicación, sin poder resarcirse de la pérdida que pueda haber experimentado en la adquisición de otras propiedades.

Me parece que ese principio sentado en el primer párrafo, última parte, no es justo. El Banco, o la institución oficial, debe transferir el inmueble por su valor real actual, según las normas que se han establecido en la ley para todas las adquisiciones. El mismo criterio debe aplicarse cuando el valor es inferior al real, porque no es posible que el consejo agrario—perdóneseme la expresión— tenga que soportar todos los «clavos» de los bancos. El consejo agrario no puede pagar por un inmueble más de lo que vale.

—El señor diputado López Merino hace una interrupción que no alcanza a percibirse.

No me parece justo que el consejo agrario tenga que comprar por 200.000 lo que vale 100.000.

Sr. Palacio. — La observación del señor diputado proviene, quizá, de que no estuvo presente cuando propuse un agregado al artículo.

Sr. Fassi. — Estoy presente desde que se comenzó la discusión, y por eso sé que el agregado a que se refiere el señor diputado tiende a prohibir que el Banco cobre más por el inmueble

si el valor real es superior a aquel por el cual lo ha adquirido. Yo entiendo que en ese caso el Banco tiene derecho a cobrar más. Y entiendo también, que si se hubiera adjudicado al Banco por un precio superior, no puede transferirle al consejo agrario por dicho valor y, por tanto, trasladarle ese mal negocio al futuro colono. Este debe comprar por su precio real. La pérdida tiene que ser soportada por el Banco, que ha hecho una mala operación y ha debido quedarse con un inmueble que no valía el crédito que había facilitado. Si el error es del Banco, es natural que éste cargue con las consecuencias, porque en realidad la aclaración que pretende el señor diputado entrañaría una injusticia. En el caso de buen negocio no le permitiría al Banco resarcirse de los malos negocios que haya podido realizar, y en cambio, en el caso de un mal negocio, lo soportaría el consejo agrario nacional, que sería en definitiva el perjudicado; salvo que ese mal negocio se trasladara al colono, lo que me parece injusto.

Por eso propongo que en la última parte del artículo 19, donde dice «... invertido para la adquisición de los mismos por su parte...» se diga: «... establecido de acuerdo con el artículo 14...» Es decir, que el precio se establecería en esas mismas condiciones.

Si a consecuencia de la obligación de vender, el Banco sufre —en su balance, no en la realidad de los hechos— un perjuicio, no se derivaría de esta ley sino del mal negocio hecho. En realidad, el perjuicio no es más que de contabilidad, porque si el Banco posee un inmueble de un valor de 1.000.000 de pesos y lo tiene valorizado en sus libros por 2.000.000, esperando una hipotética valorización, en el momento en que lo traslade, no está perdiendo nada, sino que está poniendo las cosas en su verdadero lugar, concordando la contabilidad al valor del activo real.

Debe modificarse, pues, el artículo, reemplazando la palabra «ceder» por «transferir»; y también debe modificarse la parte del párrafo primero, dando el exacto concepto de que el Banco está obligado a transferir por el valor actual de los bienes fijado en la misma forma que en los casos de expropiación.

También debe quedar bien sentado desde ahora, porque del articulado del proyecto no surge, que el colono no va a quedar convertido en propietario por el hecho de pagar el 10 % del importe del inmueble que adquiriera, sino que desde ese momento tendrá un contrato con el consejo agrario nacional y estará sometido a las reglas que fije el consejo sobre explotación

de la tierra, régimen de cooperativas, etcétera, y recién cuando haya oblado la mitad del precio de adquisición se le otorgará el título garantizándose el saldo de la deuda con una hipoteca que se trasladará al Banco Hipotecario Nacional.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

No dudará la comisión que la intervención de algunos diputados en este punto responde al propósito de hacer viable el mismo artículo 19 y evitar futuras dificultades de aplicación. Comparto con el señor diputado por Buenos Aires, doctor López Merino, el pensamiento de que el carácter de obligatoriedad que se le da a las transferencias de los bancos acaso pueda ser substituído por una fórmula más flexible; pero, comprendiendo las objeciones formuladas por el señor miembro informante de la comisión, en el sentido de que no puede dejarse al arbitrio de los bancos la oportunidad o conveniencia de hacer práctica la cesión. Concluyo en que la redacción adoptada en el artículo 19 significa simplemente que los bienes colonizables de los bancos también están sujetos a expropiación; significa que la expropiación por concepto de utilidad pública que se aplica a los particulares, se aplica también a las instituciones bancarias oficiales.

Sr. Ravignani. — Como titulares del patrimonio.

Sr. Palacio. — Sin duda.

Sr. Guillot. — A esa aclaración íbamos: que los bancos, en virtud de disposiciones de su ley orgánica no pueden oponerse a la transferencia de los bienes en razón de que prácticamente también ellos son expropiables en favor del consejo nacional agrario.

El segundo punto sobre el cual se expidió el señor diputado Fassi ya resulta un poco más complejo. Las instituciones bancarias —y nos referimos especialmente al Banco Hipotecario Nacional y al Banco de la Nación— están obligados a ceder sus tierras. La comisión había creído equitativo que se pagara por ellas el importe que los bancos invirtieron en su adquisición, pues no quería, al parecer, que, en función de las disposiciones de esta ley, los bancos, ya obligados a ceder, fueran perjudicados también en cuanto al precio por la diferencia que pudiera existir entre lo pagado y lo que habrían de recibir por concepto de transferencia de las propiedades.

Sr. Fassi. — Yo quisiera que el señor diputado resolviera este caso concreto para aclarar el sentido del artículo. Supongamos que un inmueble ha sido adjudicado al Banco de la

Nación en 2.000.000 de pesos y que el valor actual del mismo es de un 1.000.000 ¿Por qué precio adquirirá ese inmueble el consejo agrario: por 2.000.000? ¿Y a qué precio se adjudicará a los colonos?

Sr. Palacio. — En ningún caso el precio de compra podrá exceder del establecido en el artículo 20.

Sr. Fassi. — Eso es otra cosa.

Sr. Palacio. — Si el señor diputado toma como ejemplo un inmueble cuyo valor excede del máximo fijado, no hay colonización posible y el inmueble no sería adquirido por el instituto.

Sr. Fassi. — No puede ser, porque ese bien tiene que volver otra vez a la actividad productiva y tiene que entregarse en propiedad a los colonos. Yo entiendo que en el ejemplo que he puesto, el Banco de Estado, que tiene computado en sus balances un inmueble cuyo valor actual es inferior al precio por el cual le fué adjudicado, tiene que sufrir la pérdida consiguiente y transferir la diferencia a pérdidas y ganancias.

Sr. Guillot. — El señor diputado anunció que iba a plantear un caso concreto y ha resultado el suyo un discurso.

Sr. Fassi. — Disculpeme el señor diputado.

Sr. Guillot. — Estamos contemplando el problema en su aspecto genérico. Yo no polemizaba ni me oponía a la sugestión del señor diputado por la Capital. Se trataba de que llegáramos a precisar una fórmula que respondiera al propósito de equidad que persigue el despacho.

La teoría del señor diputado Fassi ya tiene sus propugnadores. También el Centro de Ingenieros Agrónomos sostiene el mismo criterio en el estudio que hemos tenido oportunidad de mencionar más de una vez y llega a la conclusión de que lo razonable sería pagar el valor de los campos considerados en este capítulo en forma análoga a los demás, cargando las instituciones propietarias con la diferencia producida.

Sr. Fassi. — Ya ve que estoy bien acompañado.

Sr. Guillot. — Entiendo que bien, porque son técnicos que han estudiado imparcialmente esta cuestión. Pero no podemos perder de vista las consecuencias financieras que pudiera acarrear el apoderarse de bienes adquiridos por bancos que en algunos casos deben servir títulos, como las cédulas hipotecarias, y que con este detrimento del valor de los bienes podrían

sufrir serios perjuicios. Considero entonces que podríamos, aunque sea alambicando un poco la fórmula, llegar a una tercera redacción que diría así: «Los bancos oficiales e instituciones del Estado estarán obligados a transferir al consejo agrario nacional las tierras de su propiedad que se les requieran para ser colonizadas, siempre que les sea garantizado el precio que se convenga, teniendo en cuenta el precio pagado para la adquisición de las mismas por esas instituciones.»

Sr. Fassi. — Sería lo mismo.

Sr. Guillot. — No, señor diputado; tendría mayor flexibilidad porque permitiría llegar a un precio equitativo que tendría por límite lo que el Banco hubiere pagado.

En cuanto a las hipotecas, insisto en creer que se arbitra un procedimiento un poco engorroso, como es el de la hipoteca, para garantizar a los bancos el importe de sus préstamos.

De ahí que propongo que en la parte final, donde dice «constituyendo hipoteca», diga «pudiendo constituir hipoteca» a favor del vendedor. Habrá casos en que la hipoteca será necesaria y otros en que no lo sea y con la modificación que propongo el consejo agrario nacional no estará atado por un precepto imperativo.

Sr. Palacio. — Puede dejarse en forma facultativa la constitución de la hipoteca, porque como se trata de una institución autárquica del Estado, nunca va a dejar de subsistir la garantía para las instituciones bancarias.

Sr. Guillot. — Refiriéndome al primer apartado del artículo, sería conveniente saber si la comisión insiste en su redacción actual, o acepta la que acabo de sugerir, o la que propongo el señor diputado Fassi.

Sr. Palacio. — ¿Cómo quedaría?

Sr. Guillot. — Se modificaría la última parte del primer apartado en la siguiente forma: «siempre que le sea garantizado el precio que se convenga teniendo en cuenta el importe pagado para la adquisición por las instituciones cedentes».

Sr. Palacio. — Significaría dar una mayor elasticidad a la disposición, no pudiendo en ningún caso ser superior al precio establecido, según la norma del artículo 20.

—Hablan varios señores diputados simultáneamente.

Sr. Pinto (h.). — Esta amable discusión se hace un poco a espaldas de la mayor parte

de la Cámara. Sería bueno que se hiciera en forma perceptible para todos.

Sr. Fassi. — Yo creía hablar fuerte y que todos me podían escuchar.

Sr. Barrau. — Es defecto de la acústica del recinto.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Sr. Palacio. — Antes de que haga uso de la palabra el señor diputado por la Capital, quiero expresar, por parte de la comisión, que ella estaría de acuerdo en que la Cámara considere el artículo en la forma como lo ha propuesto el señor diputado Guillot, con el agregado a que me he referido y con el que ha hecho el señor diputado por la Capital.

Sr. Barrau. — Podría leerse por Secretaría.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Secretaría lo va a redactar y en seguida procederá a su lectura.

Sr. López Merino. — Pido la palabra.

Quiero dejar constancia que no se puede contemplar en la misma forma la situación del Banco de la Nación Argentina que la del Banco Hipotecario Nacional.

El Banco Hipotecario Nacional emite cédulas cuyo servicio se hace a razón del 5 y del 4 % y se le va a obligar a recibir el 3 % de interés por una suma que la tiene que servir al 4 y 5 %. Eso tiene que traer una perturbación en sus finanzas que la Cámara tiene que contemplar, siendo esa la razón de la modificación que yo había propuesto.

Sr. Barrau. — La comisión había aceptado...

Sr. Simón Padrós. — Habiendo aceptado la comisión que se colocara como precio el que se convenga, queda salvada la observación que formula el señor diputado, porque en el precio que se convenga el Banco Hipotecario Nacional cuidará sus finanzas.

Sr. Fassi. — Pido que también se lea el artículo que he propuesto.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a leer el artículo de la comisión, con las modificaciones aceptadas.

Sr. Secretario (González Bonorino). — En el primer párrafo hay también una modificación, que entiendo ha sido propuesta por el señor diputado O'Reilly, quedando así: «Los bancos oficiales e instituciones del Estado estarán obligados a transferir al consejo agrario nacional las tierras de su propiedad que les reclame para ser colonizadas, siempre que les sea garantizado el importe que hubieran invertido para la adquisición de las mismas por su parte, y no pudiendo en ningún caso ser superior

al precio resultante, según las normas del artículo 20.»

Sr. Palacio. — Lo que había aceptado la comisión es substituir la palabra «ceder» por «transferir». Es lo que propuso el señor diputado Reyna.

Sr. Pita. — El diputado Fassi.

Sr. Ravignani. — Que se lea otra vez.

—Se lee:

Los bancos oficiales e instituciones del Estado estarán obligados a transferir al consejo agrario nacional las tierras de su propiedad que les reclame para ser colonizadas, siempre que les sea garantizado el precio que se convenga, teniendo en cuenta el importe invertido por las instituciones que hagan la transferencia.

Sr. Fassi. — Pido que se lea el artículo que yo he propuesto.

Sr. Palacio. — La parte final del artículo diría: «no pudiendo en ningún caso ser superior al precio resultante según las normas del artículo 20». Este agregado es a efecto de que el consejo nunca adquiera a un precio que haga imposible la colonización.

Sr. Secretario (González Bonorino). — El señor diputado Fassi ha propuesto el siguiente artículo: «Los bancos oficiales o las instituciones del Estado estarán obligados a transferir al consejo agrario nacional las tierras de su propiedad que les reclame para ser colonizadas, siempre que sea garantizado su importe establecido de acuerdo al artículo 14.»

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Oreo, señor presidente, que el artículo que se ha propuesto como una transacción en el deseo de conciliar las opiniones expresadas, no es satisfactorio, y no lo es por lo siguiente: establece la obligatoriedad de la transferencia, pero siempre que el Banco se ponga de acuerdo sobre el precio con el consejo agrario. ¿Qué obligación es ésta que le permite al Banco decir que no transfiere porque no se ha llegado a un acuerdo sobre el precio? Y no hay una sola norma para decir cómo se va a solucionar el conflicto entre el consejo agrario nacional y el Banco que debe hacer la transferencia.

Me parece justo que se le pague al Banco lo que la tierra vale. Se me dirá que esto puede significar un perjuicio para el Banco, porque él tiene que atender los servicios de esas tierras que se ha adjudicado a un precio mayor, como ocurre en el caso del Banco Hipotecario Nacional. Es evidente que puede haber un perjuicio, lo mismo que en el caso de los saldos personales. Es un mal negocio que ha hecho el Banco y éste que tiene grandes ingresos, que

va a tener ahora grandes beneficios, debe paulatinamente ir cubriendo esos malos negocios, como ha hecho en el pasado.

Lo natural y lo lógico es que el consejo agrario no pague un centavo más que lo que el inmueble vale. En el supuesto de que el inmueble valga más que el precio de adquisición, no se lo encarece al pagar lo que vale, y no sería equitativo que se estableciera un privilegio para el colono que justamente va a comprar esos campos, vendiéndoselos a menos de lo que en realidad valen. Lo justo es que el Banco soporte todas las pérdidas a que lo han llevado errores de administración, crisis o cualquier otra circunstancia, y se beneficie con todas las posibilidades de valorización de los inmuebles.

—Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 1º, don Carlos A. Pita.

Me parece que no es justo tener este doble criterio: cuando se trata de un particular lo tratamos con toda severidad, le imponemos esta norma: decimos que se expropia sobre estas bases y ese particular puede encontrarse en la misma situación del Banco. Puede ser un Banco particular que ha hecho negocios tomando las mismas precauciones de un Banco del Estado y sin embargo a él le vamos a expropiar por el valor actual mientras que al Banco del Estado hay que respetarlo y si ha hecho un mal negocio es necesario que siga figurando brillantemente en sus balances un inmueble que no vale la suma con que aparece.

Entiendo que la expropiación está bien con respecto a los particulares, pero entre dos reparticiones autárquicas debe fijarse otra norma y no hay regla más justa que la adquisición por el precio real en el momento en que la adquisición se produce.

Insisto en el artículo como lo he redactado, pues la redacción propuesta con buena voluntad y técnica por el señor diputado por la Capital no es satisfactoria, lo que me obliga a perseverar en la mía.

Sr. Anastasi. — Como nos parece inobjetable la proposición del señor diputado Fassi pediría que se lea el despacho de la comisión con el propósito de saber si puede coincidir con esa forma, y que se lea igualmente la proposición del señor diputado por la Capital.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer, con las modificaciones aceptadas, el despacho de la comisión.

Sr. Secretario (González Bonorino). — «Artículo 19. — Los bancos oficiales e institucio-

nes del Estado estarán obligados a transferir al consejo agrario nacional las tierras de su propiedad que les requiera para ser colonizadas, siempre que les sea garantizado el precio que se convenga, teniendo en cuenta el importe invertido en su adquisición por las instituciones que hagan la transferencia, no pudiendo en ningún caso ser superior al precio resultante, según las normas del artículo 20.

«Los inmuebles que de esta manera se adjudique el consejo, serán pagados en anualidades vencidas con amortización acumulativa, pudiendo constituirse otra hipoteca a favor del vendedor.»

Sr. Anastasi. — Debe aceptarse la proposición del señor diputado por la Capital, doctor Fassi, porque prácticamente la fórmula de ella deja sin efecto la obligatoriedad de la transferencia porque, como muy bien se ha dicho, el Banco no se pondrá de acuerdo con el precio que ofrece el consejo agrario y no hay ninguna solución mejor que comprar el bien por lo que vale.

Sr. Horne. — Pido la palabra.

Yo creo que en esto hay una confusión. La proposición del señor diputado Fassi no contradice absolutamente al despacho de la comisión y está de acuerdo el despacho de la comisión con el criterio del señor diputado, como verá la Cámara.

El capítulo subsiguiente, sobre adquisición de inmuebles, establece las normas en que la adquisición se hará. Establece para la adquisición previa, el quórum para votarla; las normas que se tendrán en cuenta para la tasación del inmueble y en dos incisos la productividad para hacer la tasación. Quiere decir, que a los bancos se adquirirán los inmuebles por el precio real que éstos tengan, en forma absolutamente igual que las compras que se hagan a particulares.

Lo que dispone el artículo 19 es nada más que lo siguiente: la obligación para los bancos de entregar esas tierras, garantizándoles el consejo en todo caso el precio en que fueron adquiridas.

Esa es la forma en que la ley resuelve el problema. El señor diputado dice que la base de adquisición está en que estas tierras deben ser adquiridas por el valor que tengan, exactamente como a los particulares. Eso es precisamente lo que establece el artículo siguiente en cuya redacción no entra para nada el criterio que se tiene para la expropiación para el caso de que el consejo resuelva expropiar, por no llegar a un acuerdo con el Banco para adquirir particularmente. En ese caso se aplicará el criterio de la ley en materia de expropiación, exactamente como a los particulares.

En consecuencia, creo que la Cámara puede votar el artículo en la forma tal cual está redactado, y ya verá el señor diputado, cuando tratemos el capítulo siguiente, que quedan comprendidos los bancos lo mismo que los particulares para las adquisiciones que haga el consejo.

Vuelvo a repetir, que el consejo agrario en ningún caso, ya se trate de bancos o de particulares, debe adquirir tierras a otro valor que el real que tengan en el momento de su adquisición.

Ese es el criterio con el cual hemos establecido las normas con que la comisión ha formulado este despacho.

Sr. Acuña. — Pido la palabra.

Voy a votar en favor de la aprobación del artículo propuesto por el señor diputado Fassi, porque su redacción es más simple y aclara mejor el concepto, con el cual parece coincidir la comisión.

Si en el artículo 14 se ha establecido la manera de indemnizar el valor de la propiedad expropiada a un particular, y si ese criterio es justo, no puede haber inconveniente para que la misma norma se aplique a los bancos oficiales, cuando se les tome la propiedad, a los fines de esta ley.

Por esa razón, votaré el artículo en la forma propuesta por el señor diputado Fassi.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

No sostengo, ni por razones de amor propio, ni por enamoramiento de la fórmula por mí sugerida, el artículo aceptado por la comisión. Entre la redacción propuesta primitivamente por la comisión y la que propone el señor diputado Fassi, puede encontrarse una zona intermedia más equitativa para la apreciación de valores, teniendo en cuenta la naturaleza de las entidades expropiadas.

Se insiste mucho en equiparar al particular con las instituciones oficiales de crédito. Creo que existe una confusión. Un particular que posee un bien, lo explota con el objeto de obtener del mismo el mayor rendimiento; de manera que cuando la ley toma como base ese rendimiento para fijar su valor real, lo hace sabiendo que ha rendido la mayor suma posible dentro de las condiciones de explotación y que, en último caso, el particular recibirá lo que percibiría en caso de enajenarlo privadamente.

El caso de las instituciones bancarias oficiales es distinto. En primer lugar, este el origen de la propiedad de esas tierras. Ni el Banco Hipotecario, ni el Banco de la Nación, adqui-

ren inmuebles espontáneamente para dedicarlos a explotaciones agrícolas. Se los adjudican contra su voluntad, como consecuencia de la garantía real de préstamos acordados; de manera que son propietarios a pesar suyo. Con mucha frecuencia, en razón de la desvalorización experimentada por los bienes fundiarios, reciben en tierras valores muy inferiores a los que constituyeron el préstamo primitivo.

En segundo lugar, ni el Banco Hipotecario, ni el Banco de la Nación, pueden explotar esas tierras en la forma en que lo hacen los particulares, dedicados a las actividades agrarias. De manera que, sin extenderse en consideraciones sobre la falta de aptitud de esas entidades bancarias para explotar racionalmente las tierras, se puede admitir de antemano que su rendimiento es forzosamente inferior al que producirían en manos de particulares y, por lo tanto, una estimación de valores basada exclusivamente en su rendimiento, no llegaría a establecer el precio real del bien expropiado.

Por último, no olvidemos —y cito el caso del Banco Hipotecario Nacional— que esos bienes han sido transferidos, como consecuencia de operaciones terminadas por adjudicación de bienes del deudor y que todo lo que percibe el Banco Hipotecario, salvo lo afectado a reservas, está destinado a amortizar las deudas contraídas por el Banco en la forma conocida de la emisión de cédulas. De manera que no es posible reducir, a objeto de fijar valores inferiores a las tierras expropiadas por el consejo agrario, ese valor que está ya calculado a los fines de la amortización de las cédulas emitidas. Estoy seguro que una expropiación realizada sin tener en cuenta lo pagado por los bienes que se ha adjudicado el Banco Hipotecario, puede redundar en perjuicio de esa institución, cosa que debemos evitar. Ya está en el ambiente una ley relativa a la extinción de los saldos personales que también va a incidir sobre el crédito del Banco Hipotecario Nacional. Debemos administrar con prudencia y mesura el desenvolvimiento de esta institución. No conviene incidir sobre ella desde todos los ángulos, en forma que pueda perjudicarla y perjudicar, por consecuencia, al país.

De ahí que considere que el principio de la obligatoriedad no está vulnerado por la exigencia subsidiaria de garantizar el precio convenido y que la estimación de este precio debe tener también como elemento de juicio el valor invertido por las instituciones que cederán sus tierras.

Por esas razones, sin creer que se ha llegado a una forma perfecta, creo que el artículo, tal como lo ha aceptado ahora la comisión, responde más al concepto de la equidad, y no vulnera los propósitos perseguidos por la ley y permite votar una disposición que mañana no tendrá dificultad de aplicación.

Sr. Repetto. — Pido la palabra.

Recuerdo con toda precisión que cuando se planteó este asunto en el seno de la Comisión de Legislación Agraria, quedó convengo como algo claro e indiscutible, que en ningún caso se adquirirían las tierras de los bancos a un precio superior al real. Para reforzar esa convicción, dijimos que el consejo agrario no podría constituirse en una institución que tomara a su cargo las operaciones ruinosas que hubieran podido hacer los bancos.

No sé si las dos líneas finales del primer apartado del artículo 19 traducen en toda su integridad este propósito, pero puedo asegurar a los señores diputados que ése ha sido el pensamiento de la comisión, sobre el cual se habló en términos precisos, llegándose unánimemente al concepto de que en ningún caso se comprarían a los bancos tierras por un valor superior al que tuvieran en el momento de la adquisición.

Sr. Horne. — Ese es el concepto de la comisión.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Insisto en este asunto con alguna desilusión, porque como están las bancas desiertas, los diputados que concurren luego a decidir la votación no sabrán las razones que hemos dado e inclinarán su voto en favor o en contra de la comisión, sin que nuestros argumentos hayan podido impresionarlos. Me parece que con el espíritu de colaboración que ha demostrado la comisión, si ella ha redactado el artículo con el sentido que le doy, no puede seguir insistiendo en una redacción que no lo traduce con suficiente claridad, porque habría una contradicción evidente entre los términos del artículo y su interpretación, según surgirá de la discusión parlamentaria; pero cuando los términos del artículo son claros y categóricos, valdrán por encima de todo. Y en esa forma los señores miembros de la comisión insistiendo en el artículo, habrán contribuido a que en la práctica queden desvirtuadas las sanas intenciones que han tenido y que son las que me movieron a plantear esta cuestión.

— Ocupa su asiento, el señor ministro de Agricultura, ingeniero José Padilla.

Sr. Simón Padrós. — Pido la palabra.

Me obliga a decir algunas más la aclaración que ha formulado al señor diputado Repetto. Si el pensamiento de la comisión es que las tierras se adquieran por su valor real, la medición de ese valor viene redactada en el artículo 20. Por tanto, la verdadera finalidad del artículo en discusión radica en su párrafo segundo, que establece que los bienes que se adquieran a los institutos de carácter público o bancos de Estado se adjudicarán pagándose en anualidades vencidas con amortización acumulativa de 1 % e interés del 3 %. Ahí está la verdadera y casi diría única modalidad que trae el artículo al régimen de las adquisiciones; porque la obligatoriedad en la venta de esas tierras a los fines de la colonización, surge ya del inciso a) del artículo 8º y del artículo 18 de este mismo capítulo VI.

La medición del valor de adquisición de las tierras es fijado por el artículo 20, y entonces pareciera que el artículo 19 en realidad puede circunscribirse, simplemente a su segundo párrafo, y así se evitará la contradicción que hacía notar el señor diputado Fassi, que podría surgir entre la discusión parlamentaria y la redacción del artículo.

Someto a la consideración de la comisión la conveniencia de suprimir el primer párrafo y mantener el segundo, que expresa el verdadero contenido de este artículo.

Sr. Ravignani. — Se podrá leer de nuevo el artículo para refrescar el conocimiento de los miembros de la Cámara respecto de la redacción del mismo, con las modificaciones.

Sr. Presidente (Pita). — Se leerá con las modificaciones que ha aceptado la comisión, y después el artículo propuesto por el señor diputado Fassi.

Sr. Lazo. — Pido la palabra.

La comisión debe ser permeable a la proposición del señor diputado por la Capital. Escuchadas las palabras del miembro de la comisión, doctor Repetto, es indudable que el texto del artículo no se ajusta al pensamiento que lo ha inspirado. En efecto, el artículo dice que se le pagará siempre que le sea garantizado el importe que hubiera invertido.

Sr. Ravignani. — Se ha cambiado.

Sr. Lazo. — Muy bien; pero de cualquier manera lo que se desea con la proposición del señor diputado Fassi es que se pague el importe en su valor real del momento, porque si la institución de crédito hubiera hecho una mala ope-

ración, es indudable que habría de adquirirlo con los errores en que hubiera incurrido al hacerse esa operación, es decir, que tendría un justiprecio recargado por esa mala operación. En cambio, si lo que se busca es que se pague el precio real del momento...

Sr. Simón Padrós. — Viene fijado en el artículo siguiente.

Sr. Lazo. — En ese caso debe aceptarse la proposición del señor diputado Fassi, que aclara perfectamente.

Sr. Horne. — Pero no establece otra base de expropiación.

Sr. Fassi. — Insisto en mi proposición movido por el deseo de que la ley salga lo más perfecta posible y que quede reconocido, de una manera clara, el criterio del valor real, que es el que surge de las palabras del señor miembro de la comisión, doctor Repetto. Las propias palabras del señor diputado Repetto podrían constituir la última parte de este artículo.

Sr. Simón Padrós. — Propongo una solución, que quizás armonice las distintas opiniones. En lugar de decir que le sea garantizado el importe, se diga: el importe será fijado de acuerdo a las normas del artículo 20, que es el valor real.

Sr. Fassi. — Como no se quiere hacer referencia al otro artículo...

Sr. Ravignani. — Lo dice en su nueva redacción.

Varios señores diputados. — Que se lea.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer el artículo.

Sr. Secretario (González Bonorino). — queda así: «Los bancos oficiales e instituciones del Estado estarán obligados a transferir al consejo agrario nacional las tierras de su propiedad que les requiera para ser colonizadas, siempre que les sea garantizado el precio que se convenga, teniendo en cuenta el importe invertido en su adquisición por las instituciones que hagan la transferencia, no pudiendo en ningún caso ser superior al precio resultante, según las normas del artículo 20. Los inmuebles que de esta manera se adjudique el consejo, serán pagados por anualidades vencidas con amortización acumulativa, pudiendo constituirse otra hipoteca a favor del vendedor».

Sr. O'Relly. — Entonces, no es el valor real.

Sr. Simón Padrós. — ¿Tendría inconveniente la comisión en que se dijera: «importe que le será fijado de acuerdo a las normas del artículo 20»?

Sr. Palacio. — No habría inconveniente.

Sr. Fassi. — Si se pone «de acuerdo a las normas del artículo 20» y se suprime el convenio entre las dos entidades, que se presta a dejar sin efecto la obligatoriedad de la transferencia, manifiesto mi conformidad con el despacho de la comisión.

Sr. Guillot. — Entiendo que no puede haber operación de traslación de propiedad sin fijarse un precio. De modo, entonces, que no podemos referirnos a importe sino a precio. Yo también busco una fórmula que sea conciliatoria, pero que también tenga en cuenta situaciones especiales de los bancos. Podríamos decir: «siempre que se haya garantizado el precio que se convenga con sujeción a las normas del artículo 20».

Sr. Fassi. — No hay ningún inconveniente.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer nuevamente el artículo 19, teniendo en cuenta que hay algunos señores diputados que no han escuchado su lectura.

—Se lee nuevamente.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Del debate que ha oído la Honorable Cámara, se desprende la absoluta inutilidad de la última parte del apartado primero de este artículo, porque todo lo que concierne a precios está claramente especificado en el artículo siguiente, el 20.

Como yo no me propongo provocar un nuevo debate sobre este asunto, me limito a solicitar que se vote por partes este apartado. Primero, hasta donde dice «para ser colonizadas», y luego, el resto del párrafo. En esta forma los diputados que consideramos superflua e inconveniente esta última parte, podremos votar en contra.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar la primera parte del primer apartado del artículo, que se va a leer.

Sr. Secretario (González Bonorino). — (*Leyendo*): «Los bancos oficiales e instituciones del Estado estarán obligados a transferir al consejo agrario nacional las tierras de su propiedad que les requiera para ser colonizadas».

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar la segunda parte del primer apartado del artículo que se va a leer.

Sr. Secretario (González Bonorino). — (*Leyendo*): ... «siempre que les sea garantizado el precio que se convenga, teniendo en cuenta el importe invertido en su adquisición por las instituciones que hagan la transferencia, no pu-

diendo, en ningún caso, ser superior al precio resultante según las normas del artículo 20».

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar el segundo apartado del artículo en discusión, que se va a leer.

Sr. Secretario (González Bonorino). — (*Le- yendo*): «Los inmuebles que de esta manera se adjudique el consejo serán pagados en anualidades vencidas con amortización acumulativa, pudiendo constituirse otra hipoteca a favor del vendedor».

—Se vota y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 20.

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

Para proponer una modificación que no es substancial, sino de detalle y que creo que la comisión aceptará.

En la primera parte del artículo 20 se dice: «previa inspección efectuada por dos técnicos». Propongo que en lugar de la palabra «técnicos», se diga «ingenieros agrónomos».

Sr. Allperín. — Por mi parte propongo la supresión de la palabra «dos».

Sr. Palacio — Pido la palabra.

Los ingenieros agrónomos son técnicos. De manera que cuando la comisión emplea la palabra «técnicos», lo hace en un sentido más amplio que si empleara la expresión «ingenieros agrónomos». Puede haber otros peritos que no son ingenieros agrónomos y que pueden formar parte del personal de la institución.

De manera que la comisión insiste en su despacho porque considera más amplio el término establecido por la comisión que la modificación que propone el señor diputado.

Sr. Pinto (h.) — He hecho la indicación con el objeto de obtener el respeto a los títulos profesionales. Los peritos agrónomos egresan de una universidad nacional y se supone que tienen conocimientos especializados en esta materia.

Si la comisión no acepta mi modificación, por lo menos pido que sugiera en forma aclaratoria la necesidad de la intervención de los ingenieros agrónomos en esas operaciones.

Sr. Palacio. — La comisión cree que están comprendidos en la disposición los ingenieros agrónomos y aun otros técnicos que no son ingenieros agrónomos, como por ejemplo los doctores en ciencias económicas y los ingenieros civiles.

Por eso la comisión mantiene el punto de vista que consigna en el artículo 20.

Sr. Barrau. — Pido la palabra.

Para pedir a la comisión tenga la gentileza de aclararme el concepto de este artículo, en cuanto a la función de los dos técnicos. porque se habla de inspección, en la primera parte del artículo que consideramos.

¿Estos técnicos van a hacer simplemente la inspección de las tierras, o harán también su tasación?

Para mí es fundamental la operación de la tasación de la tierra, porque es la base en la que va a residir el precio y si no lo dice el artículo como se hará en definitiva habría que establecerlo claramente.

También, si el pensamiento de la comisión fuera que la tasación la hagan solamente los dos técnicos sin ser revisada ni aceptada en forma definitiva por el consejo agrario, yo voy a pedir la modificación, porque es fundamental, de que la responsabilidad de la tasación la tengan los directores del consejo agrario, toda vez que ella va a ser la base del precio de compra.

Sr. Horne. — Pido la palabra.

La inspección comprende un estudio amplio que se hará de la tierra a adquirirse, de acuerdo a las normas que se establecen en el artículo en discusión: el inciso b) dispone la tasación del inmueble, para la cual se fijan normas, y el inciso c) dispone en dos apartados que deberán tenerse en cuenta los precios de los productos en un número de años no inferior a diez, etcétera.

De manera que el informe que deberán hacer los técnicos será amplio, debiendo hacerse de acuerdo a las normas fundamentales que establece el artículo en discusión.

Sr. Barrau. — Muy bien, señor diputado. Pero yo pregunto si la tasación que han de hacer esos técnicos será definitiva y si constituirá la base para la adquisición.

Considero que no debe ser ése el concepto de la ley, porque la tasación, debe ser revisada y aprobada por el consejo agrario, el que deberá tomar la responsabilidad de dicha operación.

Sr. Horne. — En esta ley se dan las normas generales, señor diputado. La reglamentación determinará oportunamente en qué forma se hará. Con toda seguridad el consejo agrario ha de crear un organismo como el que existe en el Banco Hipotecario Nacional, que tiene técnicos que hacen las inspecciones y un cuerpo de control en el que se condensan todos los estudios realizados. Pero como lo establece el artículo y conforme a la mayoría que establece el inciso a), es el consejo agrario el que en definitiva debe resolver sobre esa operación, de acuerdo a su criterio.

De manera que creo que con la observación del señor diputado y las aclaraciones hechas, el consejo agrario tendrá un punto de vista para poder organizar los estudios a este respecto.

Sr. Barrau. — A pesar de las manifestaciones del señor miembro informante, mi observación queda en pie y le doy forma pidiendo que en el inciso b), después de las palabras «la tasación del inmueble se hará», se agreguen estas otras: «por el consejo», siguiendo el resto del artículo.

Considero fundamental el agregado que propongo.

En los primeros artículos de la ley se han establecido las funciones y la responsabilidad de los miembros del consejo y no se podría dejar supeditado a una reglamentación de la ley, que la operación más fundamental, como es la tasación de las tierras, quede en manos de dos empleados, por más técnicos que ellos sean.

Sr. Horne. — El concepto y los términos del artículo son bien claros. Dice: «previa inspección efectuada por dos técnicos de su personal para la adquisición de inmuebles, el consejo se guiará por estas normas fundamentales». De manera que es el consejo el que ha de determinar en definitiva cuál ha de ser la tasación.

Este es el concepto de la comisión.

Sr. Ravignani. — El encabezamiento del artículo aclara todo.

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

Con las palabras que ha pronunciado oportunamente el señor miembro informante de la comisión me doy por satisfecho.

Como el propósito de la discusión es que sirva como elemento ilustrativo para la interpretación de la ley, queda entendido que los ingenieros agrónomos, dentro de la calidad de técnicos de que habla el artículo, tendrán preferencia para el estudio a que se refiere este artículo.

Sr. Presidente (Pita). — Queda aclarado, señor diputado.

Sr. Boatti. — Se entiende que los inspectores son los técnicos que harán las tasaciones, porque primero se habla de inspecciones y después de tasaciones, y no se dice quiénes las van a hacer.

Sr. Allperín. — Pido la palabra.

Me llama la atención que el despacho disponga el número de técnicos que deben efectuar la inspección.

Hago indicación de que se suprima la palabra «dos», porque de acuerdo a la importancia de la operación será el número de técnicos que deben intervenir.

Sr. Palacio. — El concepto de la ley, señor diputado, es de que estas tasaciones deben hacerse controladas.

Cuando la ley dice dos técnicos, quiere significar que ha de haber un control en la tasación, sin perjuicio de que sean dos, tres o cuatro, según lo determine la importancia del caso.

En cuanto a la otra observación que formulaba el señor diputado Barrau, es evidente que las tasaciones las van a hacer los técnicos, pero todas las tasaciones de los inmuebles serán fijadas por el consejo, por el voto por lo menos de cuatro de sus miembros, que será la voluntad suprema en las adquisiciones, en la fijación de los precios y en las mismas revisiones de las tasaciones.

Sr. Allperín. — Pero no debe establecerse el número de los técnicos.

Sr. Palacio. — Podría suprimirse el número, aunque debe consignarse que por lo menos deben ser dos.

Sr. Maino. — Pido la palabra.

Cuando se trató el artículo 14, se establecieron las normas por las cuales debía regirse la estimación del valor de la tierra a expropiarse.

Ahora, en el inciso b) del artículo que consideramos, se establecen normas distintas que constituyen, a mi juicio, una incongruencia. Las normas deben ser uniformes.

Sabido que el tanto por ciento de la renta en nuestro país está —no sé si exagero al decir que en la totalidad de los casos— muy por encima del normal, que sería 6 por ciento. Si se estatuye, como se propone en este inciso, que la renta ha de capitalizarse al 5 ½ %, significará que una hectárea de tierra que ha estado devengando 30 pesos de arrendamiento anual resultará valuada en 550 pesos. Es notoriamente un precio exagerado. Consagraríamos algo parecido a la usura que se ha estado ejerciendo en nuestro país debido al exceso de demanda de tierra por el valor de las mismas.

Pero aparte de este argumento de carácter incidental, está lo que he expresado antes: el inciso b) establece para la adquisición de inmuebles una norma que difiere de la establecida en el artículo 14 para los casos de expropiación. Para uniformar, propongo que el inciso b) diga lo siguiente: «La tasación del inmueble se hará de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 14.»

Propongo, asimismo, la supresión del inciso c), por cuanto en el inciso b) se establecería que para fijar el precio se tendrá en cuenta

el artículo 14, en el cual se menciona que se tendrá en cuenta la producción de los últimos diez años. Dejar el inciso c), significaría caer en redundancia.

Sr. Palacio. — La comisión acepta la proposición del señor diputado por Buenos Aires, porque correlaciona mejor las disposiciones de la ley.

Acepta, asimismo, la supresión del inciso c), porque se referiría a condiciones que ya figuran en el artículo 14.

De modo que el artículo 20 estaría compuesto por el inciso a) del despacho, y el b) en los términos que ha propuesto el señor diputado.

Sr. Boatti. — Pido la palabra.

Sin proponer una modificación deearía que la comisión declarase que cuando se habla de técnicos se entiende que son los ingenieros civiles y los ingenieros agrónomos y geógrafos.

Sr. Lazo. — Podrían ser otros: doctores en ciencias económicas...

Sr. Boatti. — Ya están reglamentadas algunas profesiones. Varias provincias, adelantándose a la Nación han establecido ya cuál es el sector que corresponde a cada uno de los profesionales. Este corresponde cabalmente a las profesiones que he mencionado.

Con la aclaración que surgiría de este pequeño debate, no habría necesidad de modificar el artículo.

Sr. Lazo. — Pero no se vota con ese concepto, porque la comisión no lo acepta. La palabra «técnicos» no implica especificar determinada rama.

Sr. Boatti. — Si no lo acepta, la comisión lo expresará así.

Sr. Palacio. — Lo puede expresar, señor diputado.

El concepto de «técnicos» está tomado con gran amplitud. Caben en él los ingenieros agrónomos, ingenieros geógrafos, ingenieros civiles, doctores en ciencias económicas y todos los que tengan un título técnico.

Sr. Boatti. — Es que hay una confusión que podría quedar perfectamente aclarada.

Sr. Horne. — El primer párrafo del artículo diría «previa inspección efectuada por no menos de dos técnicos...»

El inciso b) quedaría en la siguiente forma: «La tasación del inmueble se hará de acuerdo a las bases establecidas en el artículo 14.» Ahí termina el artículo.

Sr. Ravignani. — Todo lo demás queda suprimido.

Sr. Palacio. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer por Secretaría cómo queda redactado el artículo 20, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Se lee:

Artículo 20. — Previa inspección efectuada por no menos de dos técnicos de su personal, para la adquisición ed inmuebles, el consejo se guiará por estas normas fundamentales:

- a) Toda adquisición será resuelta por el voto de por lo menos, cuatro de sus miembros;
- b) La tasación del inmueble se hará de acuerdo a las bases establecidas en el artículo 14.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se aprueban los artículos 21, 22 y 23.

Sr. Ministro de Agricultura. — Pido la palabra.

Deseo proponer un nuevo artículo, con el propósito de tender a la radicación definitiva del agricultor en el predio. El nuevo artículo diría así: «El consejo estudiará tipos económicos de vivienda y podrá, previo acuerdo con el comprador, construir la casa habitación, cuyo importe se pagará en las mismas condiciones que el precio de la tierra y que no podrá exceder del valor de la misma. Si el comprador optara por un modelo más caro que el establecido por el consejo, deberá pagar al contado la diferencia de precio.»

No son desconocidas las condiciones un tanto difíciles en que el agricultor inicia los cultivos y su explotación. Es necesario entonces, que por lo menos pueda tener la tranquilidad de un hogar.

Por otra parte, el límite al cual se llegará está dentro del valor presuntivo del predio, que se calcula aproximadamente en \$ 30.000, y que la calidad del suelo hace que varíe con la extensión de lo que se compra. Sería una extensión de 200 hectáreas si el valor del suelo fuera 150 pesos; de 100 hectáreas si el valor del suelo fuese de 300 pesos. En esta forma se establece una escala que está de acuerdo con la naturaleza de la tierra que se va a cultivar y con la posibilidad de que responda al concepto que la Honorable Cámara tuvo en cuenta al referirse a la pequeña propiedad.

Tengo la convicción de que así la ley dará estabilidad más cierta al agricultor que tienda a cultivar el suelo ofreciéndole la oportunidad de radicarse definitivamente en él.

Sr. Paz. — Se podría leer nuevamente el artículo proyectado por el señor ministro.

—Se lee.

Sr. Presidente (Pita). — ¿Acepta la Comisión?

Sr. Horne. — Pido la palabra.

La comisión lamenta decir al señor ministro de Agricultura —que ha colaborado tanto en la redacción de este despacho—, que en este caso tenga que estar en contra de su proposición. Ente asunto lo hemos discutido en el seno de la comisión. Dadas las características de esta ley, la comisión desea que no se distraigan fondos sino en las obras que específicamente comprende.

Ha establecido en el artículo 67 un crédito especial para instalaciones y máquinas hasta la cantidad de \$ 6.000 m/n. para que el colono pueda hacer su pequeña casita, tender alambrados y comprar implementos agrícolas. El Banco de la Nación, por otra parte, institución que tiene en ejecución la ley de crédito agrícola, termina de dictar una reglamentación muy interesante que coloca a los agrarios de todo el país en condiciones de adquirir préstamos con ventaja para poder hacer sus casas propias, para lo cual el Banco de la Nación ha establecido tres tipos de construcción según las distintas zonas del país y de acuerdo a las perspectivas económicas de cada agricultor.

Por estas razones la comisión no acepta el agregado del señor ministro, creyendo que se evita así dar al consejo agrario nacional una facultad que quizá escaparía un tanto a su acción y posibilidades.

Sr. Ministro de Agricultura. — Pido la palabra.

Creo que con la sanción del artículo se propone al concepto integral de la ley. No hay absolutamente una diferenciación entre los propósitos que la ley expresa y lo que el artículo manifiesta. Se tiende justamente a que el agrario pueda radicarse en el suelo, sin la angustia de no tener un sitio donde habite con su familia. El artículo a que se refiere el señor diputado tiene otra finalidad y los beneficios de los préstamos que el Banco de la Nación acuerda quizá no pudieran incluir a los que comprende la ley de colonización que discutimos, porque no tendría el agrario la posibilidad de garantizarlo en otra forma, ya que el terreno mismo no podría servir para tal efecto.

Sr. Anastasi. — Se podría leer nuevamente el agregado propuesto por el señor ministro.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer.

—Se lee nuevamente.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

A nosotros nos parece razonable el agregado del señor ministro. Por de pronto, se confiere al consejo una función de estudio, lo que quiere decir que el plan de edificación de la vivienda rural estará sometido a la consecuencia de ese estudio. En lo demás, es una manera de contribuir a resolver el problema de la edificación rural, ya que en su mayoría nuestros agrarios viven en condiciones de alojamiento desastrosas. A mayor abundamiento, es lo que ocurre en muchos países, donde la situación deficiente de la vivienda agraria ha determinado iniciativas legislativas precedidas de encuestas fundadas, a algunas de las cuales se ha hecho referencia en aquella a que aludí del Ministerio de Agricultura.

Entendemos que la comisión no tiene por qué cerrarse, como lo hizo en la última sesión, cuando ni siquiera quería que el consejo agrario estudiara un plan de difusión de la asistencia médica en el campo. Se trata de enmiendas que contribuyen a mejorar el despacho y son expresión de un anhelo que podrá realizarse en la medida de lo posible.

Por estas razones, algunos diputados que hemos cambiado ideas sobre el artículo, votaremos el agregado.

Sr. Pandolfo. — Pido la palabra.

Vamos a apoyar la indicación que propone el señor ministro y quiero dar un antecedente al respecto.

En la provincia de Santa Fe se ha votado la ley de vivienda popular, que contiene más o menos el pensamiento que acaba de exponer el señor ministro en su modificación al despacho de la comisión y que entendemos es, en definitiva, lo que debe hacerse.

Sr. Repetto. — Desearía pedir al señor ministro una aclaración sobre la proposición que acaba de formular: no he entendido bien si el señor ministro ha dicho que el consejo agrario «proyectará» o «construirá».

Sr. Ministro de Agricultura. — No dice «construirá», sino «estudiará».

Sr. Ruggieri. — Que se lea nuevamente.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer.

—Se lee nuevamente.

Sr. Repetto. — Pido la palabra.

Comprendo el propósito del señor ministro y lo aplaudo íntimamente porque si hay algo que debe ser, no digo transformado, sino creado en nuestro país, es la vivienda y sobre todo en el campo donde prácticamente no existen vivien-

das humanas. Pero estamos proyectando una ley de colonización para transformar en propietarios a pobres agricultores que carecen de lo más fundamental, que apenas podrán pagar la cuota inicial del valor de la tierra, que se cargarán de obligaciones y por eso deberán hacer anualmente los servicios de todo lo que hayan comprado a crédito: en primer lugar, la tierra, luego implementos de trabajo, animales, alguna vitualla para pasar parte del año, semillas... Todo eso tendrán que pagarlo ellos, con intereses, a fin de año. Y nosotros todavía los seducimos con la perspectiva halagadora de incurrir en un nuevo gasto, construyéndose uno de los magníficos chalecitos que expone ahora el Banco de la Nación en la Exposición Rural, de Palermo.

Evidentemente, hay exageración en esos modelos de la Exposición Rural. Todo eso está tomado un poco en un sentido deportivo, porque no me parece muy probable que esa casita de la Exposición Rural, con ese magnífico living, alfombrado con cueros crudos de vacunos de raza holandoargentina, pueda difundirse, señor ministro. Eso es exagerar un poco la nota, llevar las cosas más allá de la realidad.

Creo que un hombre de campo enérgico, que va a emprender la lucha necesaria para llegar a la propiedad del suelo, dispuesto a afrontar todas esas dificultades, es un hombre que sabrá construir la vivienda que necesite durante los primeros años, mientras esté sometido a un servicio tan pesado de intereses y amortización. Y más adelante podrá ese agricultor, ya más o menos estabilizado, ir al Banco de la Nación, apelar al crédito agrario y construirse una vivienda mejor, porque el Banco para eso acuerda también crédito. Pero a lo sumo, lo que podría hacerse sería difundir modelitos de buenas casas, adecuadas a la zona respectiva, utilizando si fuera posible materiales de construcción del lugar y dando a las casas una disposición y un confort que no tienen, por cierto, las actuales casas de campo.

Pero creo, señor ministro, que no dejaría de ser una apreciable complicación que este consejo agrario, que va a tener que estudiar y encontrar la manera de resolver el vasto problema contenido en esta ley, tuviera que ponerse a difundir buenos planos de casas confortables y hasta ponerse a construirlas, porque el señor ministro admite también esta posibilidad, y concede que en la construcción de esas casas pueda invertirse una suma que represente el 20 % del valor del campo.

Sr. Ministro de Agricultura. — Como máximo.

Sr. Repetto. — Como máximo, y es bastante, señor ministro.

Creo que todo esto, que responde, como he dicho, a un excelente propósito, no es práctico. Estimularemos, tal vez, en algunos agricultores, especialmente en los noveles, esos que salen al campo sin más noticia concreta que las lecturas hechas en revistas y libros, los estimularemos a lanzarse a iniciativas precipitadas que luego podrán dificultar el pago de la propiedad que se adquiera. Es fundamental que quiera pagar cuanto antes para verse libre de toda obligación respecto de ese trozo de tierra que trabaja.

Yo sé que en todas partes del mundo se está tratando ahora de la vivienda obrera. El señor diputado Anastasi ha insistido hace pocos días sobre la necesidad de ocuparnos de la vivienda rural y es éste un asunto que también se está estudiando mucho en Europa.

Sé todo esto, que es muy interesante. Pero me parece que ahora lo urgente es colocar rápidamente al comprador de uno de estos lotes en situación de amortizarlos cuanto antes y no aumentar sin consideración sus compromisos y obligaciones.

Hay que tener en cuenta, también, que esta ley, en el artículo 67, fija una suma de seis mil pesos para la primera instalación, para los primeros gastos; seis mil pesos que se suman al valor de la tierra y que van a formar una deuda que obligará a un desembolso de cierta consideración para el pago de los servicios.

Digo esto porque me parece razonable y porque he llegado a esta conclusión, que ya he manifestado alguna vez: me parece que no hay chacarero en este país que pueda amortizar una chacra si lo obligamos a pagar un interés superior al tres por ciento y si aceleramos las amortizaciones de acuerdo con el tipo del Banco Hipotecario.

Hay que facilitar, hay que reducir, hay que llevar las obligaciones de los adquirentes al mínimo. Esta será la manera de que lleguen a cumplir con sus compromisos. De otro modo el consejo agrario hará escrituras y entregará tierras, pero al cabo de tres o cuatro años tendrá que volver a tomarlas para buscar nuevos adquirentes u ocupantes.

Por estas razones, señor ministro, yo deploro contrariar un propósito tan interesante, que el señor ministro aplica ahora universalmente a todos los aspectos del trabajo del campo argentino. En esta oportunidad me parece que

sería una complicación para los fines fundamentales que el señor ministro persigue, pues ya está consignada la suma de seis mil pesos que pueden servir para hacer la primera instalación.

Sr. Simón Padrós. — De la lectura hecha de la iniciativa del señor ministro surge que la construcción de viviendas se proyecta como facultativa y no imperativa.

El consejo agrario proyectará, y en su caso convendrá con el adquirente de la tierra, la construcción de casa en las condiciones adecuadas. Por otra parte, habrá siempre la posibilidad de ayudar esta financiación por las disposiciones actuales del crédito agrario, de manera que el propio consejo podrá ser en su oportunidad un gestor muy indicado, muy genuino, para que esas operaciones del crédito agrario puedan llegar a tener pronta efectividad.

De ahí llego a la conclusión de que la iniciativa no daña al proyecto y por el contrario, agregándole la casa, que es el hogar, constituiría un anclaje más a la tierra que se trata de adquirir. Por consiguiente, no veo inconveniente en que sea agregada al proyecto, la iniciativa del señor ministro.

Sr. Pandolfo. — ¿Qué dice la última parte del artículo?

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (González Bonorino). — «Si el comprador optara por un modelo más caro que el establecido por el consejo, deberá pagar al contado la diferencia de precio.»

Sr. Pandolfo. — Quiere decir que tiene posibilidad de tener una casa mejor.

Sr. Noel (M.). — Pido la palabra.

Deseo señalar la importancia que, a mi juicio, tiene prever con arreglo al concepto que informa al artículo propuesto por el señor ministro, la posibilidad de que se puedan construir determinadas casas rurales adecuadas al clima, a los materiales a emplearse y a las condiciones topográficas, dentro del orden económico y social de cada una de las zonas de la República.

Digo esto porque de los últimos estudios urbanísticos que he venido realizando con motivo del proyecto que he sometido a consideración de la Honorable Cámara sobre la dirección nacional de urbanismo —la que acaso en lo futuro pueda oportunamente coordinar este aspecto tan substancial del problema—, resulta que de un tiempo a esta parte las estadísticas señalan una mortalidad ascendente en las vi-

viendas rurales con relación a las de las ciudades.

Es pues menester que en una ley tan orgánica como la que discutimos, preveamos y nos preocupemos de la posibilidad de que el consejo agrario estudie esta situación dentro de los principios —aunque la palabra parezca un poco ampulosa— científicos que corresponden a este problema; de tal modo que estas viviendas puedan llenar la función social que es indispensable vincular al programa integral de la obra de colonización que nos proponemos desarrollar.

Sr. Ministro de Agricultura. — Pido la palabra.

Podría conciliarse el temperamento de la comisión con el que yo he propuesto, disminuyendo el porcentaje establecido al 10 por ciento.

Evidentemente el agricultor tendrá que construir su vivienda, y la hará directamente o por medio del consejo agrario. Haciéndola el consejo agrario después de un estudio minucioso, por medio de técnicos capacitados, no faltará el mínimo de confort que responda a las necesidades del agricultor y de su familia; y dado el número elevado de casas que habrá de construir y los técnicos que tendrá a su servicio, estará en condiciones de hacerlo en forma superior a la que está al alcance del propio agricultor.

El 10 % será el mínimo compatible con las condiciones de vida del agricultor en su propio predio.

Si la comisión considerase que será excesivo el préstamo, agregado al que el artículo 60 fija, se podría establecer que de los 6.000 pesos que se concederán en la forma contemplada por ese artículo, se disminuya lo que se le otorgue para construir su casa de acuerdo con el artículo que yo propongo.

Sr. Lazo. — Pido la palabra.

Voy a votar favorablemente la proposición formulada por el señor ministro, porque hace a la esencia del proyecto de colonización.

Siempre que se ha hablado de los problemas agrarios, de todos los sectores han partido voces en el sentido de que es necesario cuidar la higiene y la salud del agricultor. A ese respecto están a consideración de la Cámara una serie de iniciativas. Y en esa materia ya hay sentados precedentes.

Cuando se sancionó la ley de arrendamientos agrícolas, se facultó al agricultor para que construyera su habitación en forma limitada, sencilla; y, a su vez, el arrendatario estaba obligado al término de la locación a indemnizarlo en pro-

porción no inferior al 10 % del valor de la tierra arrendada. ¿Por qué hemos de mostrarnos impermeables a la proposición del señor ministro, si precisamente aclara un concepto que está expresado en el artículo 67? En ese artículo, se dice: «El consejo procurará ubicar especialmente en las explotaciones oficiales a los hijos de agrarios y a los egresados de las escuelas de agricultura y ganadería, con preferencia a los casados, pudiendo habilitarlos con las sumas necesarias para instalaciones y máquinas, hasta la cantidad de \$ 6.000, que serán reintegrados en la forma que determine el mismo consejo». Al hablar de instalaciones y máquinas, es de suponer que no se refiere únicamente a las instalaciones inherentes al laboreo de la tierra, sino también a la vivienda.

Sr. Horne. — Eso ya lo hemos dicho.

Sr. Lazo. — Siendo ése el pensamiento que inspira al artículo, la proposición del señor ministro tiende a fijar en forma más precisa ese pensamiento. Quiere que de esa suma se destine una parte para construir la vivienda del agricultor; que ella no sea totalmente insumida en los útiles de labranza y en las instalaciones que hacen al trabajo del campo.

La iniciativa lanzada en el recinto, sin que pueda sorprender a nadie, no puede sino merecer el voto de la Cámara en forma auspiciosa. No veo dificultad en que se haga la incorporación del artículo propuesto.

Sr. Labayen. — Pido la palabra.

Desde luego el señor ministro se imaginará cómo deploro no poderlo acompañar en la iniciativa. No ha de pensar, por cierto, porque se necesita para ello excesiva suspicacia, que la comisión por vanidad no va a aceptar iniciativas del señor ministro y de los señores diputados. Como lo ha dicho recién un señor diputado. Hemos aceptado la mar de iniciativas y aceptaremos todas las que nos parezcan aceptables dentro del plan orgánico de la ley de colonización que hemos proyectado.

La proposición del señor ministro no es una cosa nueva dentro de la economía de la ley. Lo que ha traído como novedad el señor ministro es que el consejo agrario proyectará un tipo de vivienda; pero el proyecto ya contempla la construcción de la vivienda, con parquedad y prudencia al determinar las cantidades que podrán invertirse en ello. El señor ministro estableció el 20 por ciento.

Sr. Ministro de Agricultura. — El 10 por ciento.

Sr. Labayen. — Bien; el 10 %. La comisión ha señalado una cantidad fija de \$ 6.000 m/n.,

no sólo para el que recibirá la tierra con la voluntad de adquirirla, sino para el que la toma en arriendo. Así, el artículo 60 dice que el consejo podrá adelantar el primer año de explotación a todo arrendatario, con opción de compra, semillas, árboles frutales, animales, instrumentos de labranza, materiales de construcción, etcétera, hasta un máximo de \$ 6.000 moneda nacional.

El artículo 67 autoriza también a entregar hasta \$ 6.000 m/n. para habilitar a los hijos de agrarios y a los egresados de las escuelas de agricultura y ganadería. Nosotros hemos querido ser muy prudentes en esta materia porque tenemos mucho, como lo decía el señor diputado Repetto —y yo no lo voy a repetir con la justeza de él probablemente— que los aventureros de la colonización, que también en el campo los hay, sean los más empeñados en hacer uso del 10 %, que proyecta el señor ministro, para construir la casa. Pero los que no son tales aventureros y conocen los sinsabores de los trabajos del campo, los que han vivido esos sacrificios, ésos no van a la aventura así no más y serán discretos para hacer uso del crédito más allá de lo que represente el valor de la adquisición, ya que para pagar la amortización e intereses tendrán que trabajar intensamente la tierra.

Sr. Allperín. — La tarea de control la tendrá a su cargo el consejo agrario.

Sr. Labayen. — El consejo agrario no podrá efectuarla porque eso significaría un privilegio. Si el consejo proyecta un tipo de casa, los colonos adquirentes podrán construir haciendo uso del crédito hasta el 10 %, pero el consejo no podrá entrar a analizar la categoría moral de cada uno, porque sería una tarea muy difícil y significaría un privilegio.

Sr. Ministro de Agricultura. — Podría comprenderlo dentro de los 6.000 pesos del artículo 60.

Sr. Labayen. — Ahora sí podríamos entrar en un terreno de transacción. Si dentro de los 6.000 pesos está comprendido el 10 %, estaremos en una situación de prudencia, y es posible que aceptemos la proposición del señor ministro; pero colocar el 10 % más allá de los 6.000 pesos puede ser una demasía que podría hacer fracasar la ley de colonización, pues podría ocurrir que cada dos o tres años hubiera que devolverse al consejo agrario las tierras que se vendieron por imposibilidad de los compradores de hacer frente a sus obligaciones.

Sr. Ministro de Agricultura. — Después de escuchar las palabras del señor diputado Re-

petto y dándole el valor que tienen, he comprendido que el 20 % pudiera ser excesivo y lo he reducido al 10 %, dejando al consejo agrario nacional el estudio necesario para comprenderlo dentro de los seis mil pesos que el artículo 60 pudiera facilitarles. Esto podría resolverse cuando tratemos el artículo 60.

Sr. Labayen. — Muy bien. En esas condiciones podríamos aceptar.

Sr. Horne. — Incluiríamos especialmente la vivienda al tratar ese artículo.

Sr. Repetto. — Si realmente se desea seguir buenos principios en materia de vivienda rural, me parece que lo más práctico sería simplificar el problema reduciéndolo a estos términos. En lugar de halagar a la gente con esas hermosas viviendas de aspecto tan pintoresco y estructura un poco complicada y cara, podríamos difundir estos principios fundamentales para la vivienda del campo: paredes y techos malos conductores de calor, pisos impermeables, puertas y ventanas con vidrios —porque el 95 % de las viviendas rurales no tienen vidrios en las puertas ni en las ventanas— un cuarto de baño o una cosa que haga sus veces, un lugar para lavarse generosamente sin preocupación de mojar el piso, agua potable y *water closet*, que es lo que falta en la mayor parte de los ingenios de Tucumán para el personal que trabaja. La ausencia de *water closet* es lo que ha difundido una enfermedad muy conocida, la auquilostomiasis, que hace muchos estragos. Con estos seis puntos damos receta fundamental para que se hagan las buenas casas y el que las construya ya sabrá ponerles alguna nota atrayente, algún árbol, enredadera o planta, o algún otro detalle decorativo.

Sr. Ministro de Agricultura. — Dada la receta, lo que se necesita es el dinero para la compra, y a eso tiende el artículo.

Sr. Lazo. — Tengo entendido que esta iniciativa ya ha sido recogida. Precisamente el Banco de la Nación ha llamado a concurso para la construcción de viviendas rurales, y se fijan los tipos de casa, como señalaba el señor diputado. Creo que estarán capacitados para entender de esas condiciones los técnicos que se han presentado a concurso.

Sr. Horne. — ¿De manera que el señor ministro acepta que se incluya en el artículo pertinente?

Sr. Ministro de Agricultura. — Yo propongo colocarlo a continuación del artículo 23 y que en todo caso, cuando se trate el 60, se redacte en forma conveniente para que en el préstamo

de 6.000 pesos se comprenda lo que el artículo propuesto expresa.

Sr. Ruggieri. — ¿Y qué le va a quedar al chacarero para la adquisición de semillas, árboles frutales, animales, instrumentos de labranza, etcétera? En algunos casos el 10 % para la construcción de la vivienda va a absorber el total de los 6.000 pesos.

Sr. Ministro de Agricultura. — No; el presunto valor de la propiedad del chacarero será, más o menos, de 30.000 pesos. El 10 % son 3.000, que es el máximo que podría recibir; de manera que para el resto de sus compras le quedarían también 3.000 pesos.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar el artículo propuesto por el señor ministro.

Sr. Pandolfo. — Lo ha postergado.

Sr. Presidente (Pita). — No, señor diputado. El señor ministro insiste en que se incluya a continuación del artículo 23 y que cuando se trate el 60 se haga la mención correspondiente.

Sr. Ruggieri. — Correspondería que el artículo que propone el señor ministro se trate conjuntamente con el 60, pues no tiene razón de ser incorporado a esta altura del despacho.

Sr. Ministro de Agricultura. — Corresponde incluirlo en este capítulo, que se refiere a mejoras. El otro se refiere a préstamos.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer nuevamente el artículo propuesto por el señor ministro de Agricultura.

—Se lee:

Artículo 24. — El consejo estudiará tipos económicos de vivienda y podrá, previo acuerdo con el comprador, construir la casa habitación, cuyo importe, que se abonará en iguales condiciones que el precio de la tierra, no excederá del 10 % del valor de la misma. Si el comprador optara por un modelo más caro que el establecido por el consejo, deberá pagar al contado la diferencia de precio.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 24, ahora 25.

Sr. Pinto (h.). — Pido la palabra.

Solicito de la comisión una aclaración. Se refiere a la posición de los egresados de las escuelas de agricultura o escuelas especializadas, en el sentido de que no se les impida el acceso a la tierra. Como tengo entendido que la comisión ha encontrado una solución a este punto, que se vincula a los artículos 25 y 26, de tal manera que una aclaración que ahora se haga sería de toda oportunidad para evitar una discusión ulterior.

Sr. Horne. — Cuando lleguemos al artículo 26.

Sr. Guillot. — Sobre ese particular había sugerido una modificación a la comisión, para ser tratada cuando se considere el artículo 26.

Sr. Anastasi. — Deseo formular otra pregunta. Si dentro del alcance del artículo 25, el agricultor que no dispone al contado del importe del 10 % no tiene manera de acceso a la propiedad.

Sr. Palacio. — No, señor diputado. No podrá adquirir el inmueble. Entrará como arrendatario con opción de compra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.

—Se da por aprobado el artículo 24, ahora 25.

—En consideración el artículo 25, ahora 26

Sr. Simón Padrós. — Pido la palabra.

Deseo consultar a la comisión si sería inconveniente en que, entre los requisitos exigidos al adquirente, se suprima el de la capacidad económica y se limite al de la capacidad profesional y personal de los agricultores.

Mi consulta y proposición obedecen a que la capacidad económica, en realidad, queda probada por el pago del 10 % a que hace referencia el artículo que acabamos de sancionar, tanto más cuanto que el artículo 60 faculta al consejo a dar anticipos para los útiles y animales de labranza. De manera que habría alguna contradicción entre el requisito del artículo 25 y el del artículo 60, y en cambio con la supresión que propongo se facilitaría la posibilidad colonizadora si la capacidad exigida se limitara a la profesional y personal.

Sr. Pandolfo. — Se suprimiría entonces la palabra «económica».

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

El concepto del artículo es que la persona que adquiera estos inmuebles tenga por lo menos el 10 % para pagar la cuota inicial de la adquisición de la propiedad. Teniendo esos medios para adquirir la propiedad no hay ningún inconveniente en aceptar la modificación del señor diputado.

Sr. Simón Padrós. — En ese caso se suprimiría la palabra «económica» y también el segundo párrafo. De modo que el tercero comenzaría diciendo: «La primera» y luego diría: «y la segunda», etcétera.

Sr. Presidente (Pita). — ¿La comisión acepta?

Sr. Palacio. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer por Secretaría la forma cómo queda redactado el artículo.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Artículo 25 del despacho, ahora 26:

«La venta de los predios se hará previa comprobación de la capacidad profesional y personal de los agricultores. La primera, se comprobará por su actuación en trabajos agrícolas similares, durante un período no menor de tres años, y la segunda, se regirá por las condiciones que determine el reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo.»

Sr. Anastasi. — Se podría poner en vez de «previa comprobación», «previa justificación», para evitar repeticiones.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a llamar para votar.

—Obtenido el quórum:

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer nuevamente el artículo por Secretaría.

—Se lee.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 26, que pasa a ser 27.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El señor diputado Guillot ha propuesto un agregado.

Sr. Guillot. — El señor diputado Horne va a explicar a la Cámara en qué consiste el agregado.

Sr. Horne. — Pido la palabra.

El señor diputado Guillot propone agregar que se dé preferencia a los egresados de las escuelas de agricultura y ganadería, asunto que ha llegado a la comisión por varios conductos: el señor diputado Labayen presentó una iniciativa análoga y nos han llegado de las escuelas de agricultura diversos pedidos en este sentido.

Sr. Pinto (h.). — Yo he formulado otra proposición, señor diputado.

Sr. Horne. — Ya voy a hablar de su proposición, señor diputado. Ahora estoy refiriéndome a los egresados de las escuelas de agricultura y ganadería.

Aunque la comisión en un artículo posterior ha contemplado el problema de estos egresados de las escuelas de ganadería y de agricultura, considerando que serán sumamente útiles si se permite la incorporación como propietarios de tierras y la habilitación respectiva para que

puedan reingresar al seno de las colonias, no hay ningún inconveniente en agregar, en este artículo, que debe dárseles preferencia, para que quede establecido en forma más categórica en la ley.

El señor diputado por la Capital doctor Pinto, en uno de los agregados que nos ha propuesto, pedía la inclusión, también, de los egresados de colonias escuelas, de los establecimientos de enseñanza agrícola, inclusive los menores de las colonias reformativos regidas por la ley número 10.903 y demás establecimientos de protección a la infancia abandonada.

La comisión, con todas estas iniciativas ha redactado un agregado final al mismo artículo en la siguiente forma: «además, serán preferidos los egresados de las escuelas de agricultura y ganadería de la Nación o provincias o de otros establecimientos de orientación agraria, que capaciten para el trabajo especializado».

De esta manera queremos comprender todos los colonos que salgan de establecimientos con una preparación y capacidad técnica en condiciones de ser buenos colonos y hasta ejemplares colonos.

Sr. Lazo. — Pido la palabra.

Descuento el voto favorable de la Cámara para las proposiciones que ha aceptado la comisión y pediría en el inciso a) la substitución de la palabra «formen familias aptas» por «tengan familias aptas». Supongo que no es el propósito de que vayan a formar la familia sino que ya debe incorporarla.

Sr. Repetto. — Que posean, entonces.

Sr. Lazo. — Muy bien; pero lo que hay que substituir es la palabra «formen».

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Estoy completamente de acuerdo con el agregado final elaborado por la comisión, refundiendo la sugestión de mi colega el señor diputado Pinto y mi proposición; pero me parece que en esta categoría de preferencias falta una condición que se exige a los agricultores en la primera parte del artículo y es la de que tengan o formen familias.

Por consiguiente, propondría que se agregue al final de la redacción leída por el señor diputado Horne, esta expresión: «cuando reúnan las condiciones especificadas en el inciso a)».

Sr. Horne. — Ese es el concepto, de manera que no hay ningún inconveniente.

Sr. Guillot. — Me explicaré. Sería absurdo que el diputado que habla propusiera la exclusión de los posibles colonos solteros, pero cuan-

do se trate el artículo 67 propondré una modificación que contemple esos casos armonizando siempre con el artículo que estamos tratando.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra para una aclaración que podrá hacer la comisión, de inmediato.

El artículo 26 me imagino que debe interpretarse con relación a los colonos extranjeros en su vinculación con los artículos 27 y 35.

Sr. Horne. — Por supuesto.

Sr. Anastasi. — En otros términos, que en las colonias que se formen en relación a ese porcentaje del 25 % no regirá esta preferencia.

Sr. Horne. — Lógicamente.

Sr. Presidente (Pita). — Se va a leer el artículo tal como ha sido aceptado por la comisión.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El artículo 26 del despacho, ahora 27, queda así: «Para la venta de los predios serán preferidos, en primer término, los agricultores que: a) Tengan familia apta para colaborar en el trabajo del predio; b) Sean de nacionalidad argentina, o extranjeros con residencia mayor de cinco años, y estén domiciliados en la región.

«Además serán preferidos los egresados de las escuelas de agricultura y ganadería de la Nación o provincias, o de otros establecimientos de orientación agraria que capaciten para el trabajo especializado, cuando reúnan las condiciones especificadas en el inciso a).»

Sr. Presidente (Pita). — Se va a votar.

—Resultado afirmativa.

—En consideración el artículo 27:

Sr. Solari (J. A.). — Pido la palabra.

Voy a proponer una modificación de forma para la mejor redacción del artículo. En las ocho primeras líneas del artículo 27 se emplea tres veces la expresión «a que se refiere». A fin de evitar esa repetición, propongo que el párrafo se redacte en la siguiente forma: «El consejo adjudicará, dentro de las colonias a que se refiere el artículo 33, el 75 % de los predios que resulten una vez efectuada la subdivisión a los agricultores de que habla el artículo anterior y podrá reservar el 25 % restante para adjudicarlo a los que lleguen del extranjero en virtud de los convenios prescritos por el inciso f) del artículo 7º.»

Sr. Palacio. — La segunda vez que se dice «a que se refiere», podría reemplazarse por la expresión «a que se alude».

Sr. Solari (J. A.). — Sí, señor diputado; lo que interesa es evitar la repetición.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Sin entrar a analizar la modificación formal propuesta por el señor diputado Solari, voy a proponer dos enmiendas de alguna importancia.

La primera consiste en disminuir la rigidez matemática de las proporciones en que se distribuirán los predios entre pobladores extranjeros y argentinos. Comprendo que el pensamiento de la ley es dar predominio a la población argentina dentro de la composición de las futuras colonias. Pero si prescribe una división matemática de 75 % de argentinos y 25 % de extranjeros, creará acaso dificultades cuando se trate de efectuar distribuciones de material humano que no siempre puede ajustarse a estas estrictas proporciones.

Por ello, propondría que se dijera: «El consejo adjudicará dentro de las colonias a que se refiere el artículo 33, hasta el 75 % de los predios que resulten una vez efectuada la subdivisión...» Y luego: «... y podrá reservar la extensión sobrante para adjudicarla a los que lleguen del extranjero...», etcétera.

De esa manera se conserva el propósito originario de dar, dentro de las condiciones en que se realiza la colonización, un predominio a la población argentina y si las circunstancias impidieran ajustar estrictamente la distribución de los futuros colonos a estas disposiciones, el consejo agrario tendría espacio donde ubicar la población, siempre con el concepto de predominio de argentinos que informa a la ley.

La segunda enmienda, acaso de mayor trascendencia, es posible que tropiece con la resistencia originada con prevenciones, quizá justificadas en parte por fenómenos ocurridos dentro de la República. Propongo que se suprima el apartado 2º del artículo y voy a tratar de exponer brevemente los fundamentos de esta proposición.

Dentro del pensamiento que inspira este artículo en el sentido de dar predominio a la población argentina, asoma también el temor de que la porción de colonos extranjeros, si poseen demasiada unidad racial u homogeneidad de conceptos religiosos o de hábitos nacionales, pueda resultar impermeable al propósito de asimilación perseguido por la ley. De manera que al prohibir que los predios de las colonias que se creen exclusivamente para cumplir con los mencionados convenios, se adjudiquen a familias de una misma nacionalidad, se advierte que trata de eliminar para el futuro la posibilidad de dificultades de asimilación o de acumulación de minorías nacionales o raciales

dentro de determinado espacio del territorio argentino. Me parece que la precaución resulta excesiva y acaso no justificada por la experiencia.

Si el 25 % restante se distribuye entre colonos de nacionalidad diversa, se comienza por crear una especie de mosaico que acaso dificulte las relaciones entre colonos de distinta nacionalidad obligados a relacionarse por razones de vecindad, y luego se prescinde de la experiencia nacional en materia de colonización y hasta, puede decirse, de la experiencia universal.

Siempre se ha comprobado que las radicaciones dentro de un país de inmigración se realizan por grupos raciales, no aisladamente; y que la colonización se practica mejor cuando el grupo de colonos se asienta en una parte determinada del territorio, conservando entre sí los vínculos de nacionalidad, de familia, de hábitos y, hasta podría agregar, de religión. El hombre que emigra trata siempre de conservarse dentro del ambiente en que ha nacido y que ha conocido. La perspectiva de desenvolverse dentro de un clima, por decirlo así, familiar y de contar con el auxilio o el estímulo moral de connacionales también radicados en la vecindad, siempre ha sido un propulsor enérgico de la colonización. Prescindir de ella acaso conspire contra los propósitos mismos de radicar extranjeros para poblar el suelo argentino y aumentar su población.

Se objetará con el argumento ya mencionado anteriormente, es decir, que estas masas homogéneas de colonos extranjeros pueden servir de obstáculo a la asimilación perseguida por la ley y anhelada siempre por los argentinos. Nuestra experiencia demuestra que ocurre lo contrario. Desde que se inició la colonización en nuestro país, se hizo siempre con colonos procedentes generalmente de las mismas naciones, hasta de las mismas regiones europeas.

Hace poco tiempo mencionaba la vieja colonización entrerriana hecha en el departamento Colón por una ley que inspiró Urquiza y que se llevó a cabo exclusivamente con colonos procedentes del cantón del Valais, en Suiza. El señor diputado Horne, que ha nacido en ese departamento, podrá testimoniar que nunca ha creado dificultades la homogeneidad nacional y racial de esos colonos. Creo que cosa análoga ha ocurrido en Santa Fe con colonos suizos o de otra procedencia.

Sr. Anastasi. — También en Baradero.

Sr. Guillot. — Quiere decir que la homogeneidad de los colonos extranjeros, lejos de ser

un inconveniente es, por el contrario, un estímulo a la radicación y un elemento propulsor de la inmigración.

Aceptar esta disposición acaso conduciría a crear un factor inconveniente para los propósitos perseguidos por la ley. Son circunstancias muy recientes, recientesísimas, las que han señalado los inconvenientes de la homogeneidad nacional de las colonias; pero son fenómenos episódicos, contingentes, refutados por la larga experiencia colonizadora nacional.

Por otra parte, la Nación dispone de medios para contrarrestar la presunta tendencia a aislarse de grupos de colonos extranjeros radicados en un mismo lugar. Está, sobre todo, la escuela nacional argentina, que transforma constantemente el espíritu del niño hijo de extranjero o emigrado de tierna edad, y que lo convierte en argentino; la aplicación de la ley por las autoridades nacionales o provinciales, que mantiene constante y permanente la presencia de la nacionalidad dentro de esas colonias; la difusión de la enseñanza por la prensa periódica; el influjo de ambiente nacional, que tan poderosamente se ha sentido en nuestro país, todo eso, señor presidente, me parece que es superior a la resistencia posible o hipotética de núcleos homogéneos radicados en determinado punto del territorio.

Por otra parte, no olvidemos que para las colonias futuras que organizará la ley que estamos votando, se prescribe que el 75 % será de argentinos o de extranjeros con larga radicación. De manera que esa masa de población tres veces superior a la inmigración recientemente, también operará sobre la masa adventicia y favorecerá rápidamente la asimilación, disipando así la tendencia a resistir el contacto o la ingerencia del ambiente argentino en esas poblaciones extranjeras.

Por eso, meditando seriamente sobre este punto —porque no improviso sobre el particular—, creo que conviene a la misma ley que se elimine este apartado segundo, elaborado frente a fenómenos que, repito, son contingentes y no esenciales y que, por una parte, contraría la tendencia constante de la colonización universal y que, por otra, refuta la experiencia nacional sobre la materia.

Con estas breves palabras fundo la segunda enmienda propuesta en el artículo en discusión.

Sr. Dickmann. — Pido la palabra.

Yo voy a proponer la supresión de las tres últimas líneas de este artículo, esperando que la comisión aceptará mi proposición. En ellas se establece: «...debiendo tenerse en cuenta para

fixar el porcentaje de colonos extranjeros la aptitud de asimilación de los mismos». Propongo la supresión de estas palabras para poner el artículo de acuerdo con el inciso f) del artículo 27, donde al final había también dos líneas del mismo tenor y que han sido suprimidas. Entiendo que con esta supresión se elimina un criterio inconveniente e imponderable en manos del consejo agrario nacional.

Acepto la modificación que propone el señor diputado Guillot en la primera parte de este artículo, donde dice «hasta 75 %». Considero que es una reforma útil, porque todo dependerá de la cantidad de colonos argentinos y extranjeros que haya para poblar el campo, dejando al criterio del consejo disminuir el 75 % cuando hubiera más postulantes de origen extranjero.

En cuanto a la proposición del señor diputado Guillot sobre supresión de la segunda parte del artículo, considero que tal vez sea una reforma útil no fomentar en el porvenir núcleos raciales o religiosos enquistados en la población argentina. Eso se ha hecho en el pasado, pero no quiere decir que convenga hacerlo en el porvenir.

Por otra parte, la formación de esos núcleos no queda suprimida del todo, pues la colonización privada generalmente tiende a ese aspecto. En la colonización oficial conviene en general mestizar —usando un término un tanto ganadero—, dejando a la iniciativa privada— filantrópica o de otra índole— la formación de núcleos en el país.

Sintetizo así mi adhesión a la primera reforma propuesta por el señor diputado Guillot, que considero que haría bien la comisión en aceptar; y a la supresión de las últimas tres líneas, porque así se pondría de acuerdo con el inciso f) del artículo 7º.

Sr. Horne. — La comisión va a aceptar el agregado de la palabra «hasta» el 75 %, y también la supresión de «25 %», por «porcentaje». Así diría: «podrá reservar el porcentaje».

Sr. Guillot. — ¿No sería mejor la expresión: «extensión»?

Sr. Horne. — Diría: «podrá reservar la extensión restante para adjudicarla».

La segunda parte, cuya supresión propone el señor diputado, la comisión la mantiene, porque esta disposición tiende especialmente a que no se formen núcleos de colonias cerradas de una sola nacionalidad. Se funda en la experiencia que tenemos en nuestro país. Por mi parte, hubiera querido aumentar el porcentaje de extranjeros, pero la comisión no lo aceptó.

Todos los países de América, en sus nuevas disposiciones agrarias, han establecido normas tendientes a evitar que se formen núcleos de colonos de una sola nacionalidad. El Brasil estableció primero normas particulares en varias colonias, y el año pasado, por un decreto en acuerdo de ministros, fijó el porcentaje de extranjeros para formar parte de las colonias.

En Chile se han adoptado normas análogas y también en Colombia. Tengo entendido que, por disposición ministerial, se han establecido normas análogas para las colonias a formarse en nuestro país.

La última parte a que se ha referido el señor diputado Dickmann, no contraría en nada las disposiciones ya votadas. Se ha suprimido toda restricción, por razón de raza o de religión, que pudiera afectar el espíritu liberal que debe tener esta ley, y estas últimas palabras del artículo no establecen restricción alguna, sino una norma al consejo agrario para que pueda determinar, dentro de las colonias, el porcentaje de acuerdo a las condiciones de asimilación de los colonos extranjeros que vayan a formar esas colonias. No hay ninguna traba, sino simplemente una disposición de orden interno, y es lógico que el consejo tenga especialmente en cuenta las condiciones y el origen de los colonos, por cuanto tenemos la experiencia, como decía el señor diputado Guillot, que hay colonos que vienen de países que no buscan extender su nacionalismo hacia los países que van a colonizar. El caso de los colonos suizos, sobre el cual tenemos una experiencia en nuestro país, así como colonos de otras nacionalidades; pero que, desgraciadamente, tratándose de algunos colonos, pretenden extender sus principios de nacionalismo hacia los países que van a colonizar.

Ese es el sentido de la restricción que se establece en este artículo, con el objeto de que el consejo agrario, teniendo en cuenta esas condiciones, fije el porcentaje por nacionalidades de los colonos que van a instalarse.

Por estas razones, expuestas sintéticamente, la comisión mantiene su despacho con los agregados aceptados.

Sr. Dickmann. — ¿No se suprimen las últimas tres líneas?

Sr. Horne. — El señor diputado no me ha escuchado cuando explicaba el espíritu que tiene la comisión al establecer este porcentaje. Los otros días, cuando el señor diputado hizo la cuestión, la comisión aceptó el suprimir todo criterio de selección, teniendo en cuenta, como decía hace un momento, el espíritu liberal de este despacho; pero en este caso, como no se estable-

ce ninguna restricción general en ese sentido, sino que se trata de un propósito de orden interno para las colonias, no veo que haya ninguna dificultad en mantenerlo, por cuanto se favorece el criterio de la ubicación de las colonias extranjeras, teniendo en cuenta su adaptabilidad de acuerdo a las razas y a la experiencia adquirida ya respecto de los colonos extranjeros aquí radicados.

No se establece ningún criterio restrictivo.

Sr. Repetto. — Pido la palabra.

Es seguro que en el momento de poner mi firma en este despacho estaba de completo acuerdo con las disposiciones contenidas en el mismo, pero como uno no es impermeable a las razones que se dan, y como en el transcurso del debate también aparecen observaciones convincentes, voy a decir algunas palabras sobre este artículo, que a mi juicio, podría suprimirse totalmente.

Es un artículo inconveniente para la propaganda inmigratoria; es un artículo que establece ya restricciones para los extranjeros; es un artículo de una aplicación sumamente difícil, porque una vez que se hayan subdividido los predios, deberá haber un 75 % de agricultores en las condiciones que establece la ley y el 25 % restante de extranjeros.

Sr. Horne. — Nosotros tenemos el grave problema de ubicar ese porcentaje enorme de arrendatarios, y ya los señores diputados han hablado en la Cámara de que ése es el principal y primer problema. De ahí que no sea antipático el tratar de ubicar primero a esos arrendatarios.

Sr. Dickmann. — Eso está contemplado en el artículo que hemos sancionado.

Sr. Repetto. — Hemos hablado de estabilizar a los arrendatarios, pero esta ley exige algunas condiciones que deben ser llenadas previamente para que puedan acogerse a ella: exigimos el 10 % del valor de la tierra, exigimos la posesión de elementos de trabajo, etcétera. De modo que podremos vernos en la situación de no poder adjudicar en estas proporciones los predios de que se disponga en un momento determinado.

Por otra parte, el hecho de que esta cláusula no figurara en la ley no quiere decir que el consejo agrario no pudiera adoptar ciertos criterios para la adjudicación de estos predios. Podría fijársele algunas normas para que se distribuyan de acuerdo con el criterio general que impera en el despacho, con el fin de facilitar la aplicación de la ley quitándole este aspecto restrictivo que no la favorece. Yo no me hago muchas ilusiones acerca de la posibilidad

de que corrientes inmigratorias puedan establecerse hacia nuestro país, pero si se suprimen vallas, que son ahora infranqueables, si nuestro gobierno contempla el problema con un criterio más sereno y más amplio y levanta un poco las compuertas que están ahora herméticamente cerradas, no será difícil que se establezcan hacia nuestro país corrientes inmigratorias apreciables desde todo punto de vista.

Así es que estoy convencido de que debe suprimirse el artículo 27, facultándose al consejo agrario a gobernar de acuerdo a los principios generales establecidos por esta ley y de acuerdo con las posibilidades de cada momento, y así se habría realizado lo que aconsejan las conveniencias del país y se habría librado este artículo de una disposición que lo hace poco simpático al propósito que nos guía.

Deseaba decir esto para salvar mi opinión de este momento, que difiere bastante de la que yo tenía al poner mi firma en el despacho. Declaro que esta manifestación de opinión no es el fruto de proposiciones ni ideas lanzadas por compañeros de grupo, sino el resultado de pensamientos y de preocupaciones inmigratorias que gravitan sobre mi espíritu en este momento, sobre todo de la corriente inmigratoria española, señor ministro, que podríamos, sin duda, disponer de ella si quisiéramos mirar las cosas con un poco más de generosidad y comprensión.

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

El señor diputado por la Capital, doctor Guillot, ha fundado tan bien su proposición, que en realidad sería innecesario agregar algunas palabras más, a no mediar la circunstancia inesperada de que la comisión no ha accedido a su sensato requerimiento.

Sin perjuicio de compartir las apreciaciones del señor diputado por la Capital doctor Repetto, en cuanto a todo el artículo, nos parece especialmente antipática la segunda parte. La conceptuamos inconciliable con la tradición nacional, contradictoria con las enseñanzas de la historia de nuestra colonización. El señor diputado Horne, que ha escrito sobre la historia de nuestra colonización, ha de darme la razón. Si precisamente los primeros núcleos colonizadores han sido núcleos provenientes de una misma nación, ¿dónde están los inconvenientes de esa unidad de colores pertenecientes a una misma nacionalidad? ¿Se han notado por ventura en Santa Fe, se han notado en la provincia de Buenos Aires, se han advertido en algunas

otras provincias en que la colonización ha seguido este sistema?

El señor diputado por Entre Ríos se refiere al ejemplo de otros países. En este momento me vienen a la memoria algunas páginas de Alberdi, que no leo desde hace muchos años, pero recuerdo que en sus *Bases*, él exhibía el ejemplo antipático de todo el resto de América e invitaba a los Constituyentes a apartarse de las enseñanzas de esos otros países, inspirados todos desgraciadamente por principios retrógrados. Parecía que no habían hecho la revolución sino para substituir un régimen feudal por otro tal vez peor.

El señor diputado convendrá conmigo, que siguen siendo de actualidad las palabras de Alberdi. Somos nosotros los que debemos dar normas al resto de América, y no inspirarnos en países perturbados por problemas particulares. ¿Cómo vamos a pedir, por ejemplo, su cooperación al Brasil en lo que se refiere a nuestro derecho público y a nuestro derecho agrario? Yo no dejo de valorar el aporte del Brasil, en lo que se refiere a la evolución de nuestro derecho privado; pero en cuanto a su derecho público, desgraciadamente, debe dejarse de lado.

Tampoco podemos seguir el ejemplo de Chile, país que no tiene prácticamente colonización; ni en el de los demás países de América, que en cuanto se refiere a la exclusión de los extranjeros siguen, más o menos, una misma norma; el sistema que aplican con relación a los agricultores es el que aplican a todos los trabajadores, sancionando en todas partes cuotas de trabajadores nacionales con preferencia a las de los extranjeros.

Además, hay que tener en cuenta un problema actual, ya insinuado por el señor diputado Repetto. No podemos seguir poniéndonos cera en los oídos —y me dirijo especialmente al señor ministro de agricultura—, en lo que se refiere al problema de los refugiados extranjeros. ¿Qué inconveniente puede haber en que en esas colonias haya elementos de una misma nacionalidad, por ejemplo la española que ha citado el señor diputado Repetto? ¿En qué va a perturbar la circunstancia de que en una colonia haya solamente españoles? Y lo que digo de los españoles, se aplica a muchas otras nacionalidades que en este momento están soportando el azote de la persecución racial o política.

La ley no es sólo de colonización interna. Es una ley que tiende a ser de colonización inmigratoria. Es una ley cuyos autores han tenido presente todo lo que se está elaborando en la organización internacional del trabajo sobre la

cuestión de las migraciones colonizadoras y a esa labor tan intensa y compleja no se le puede responder con una sanción que, vuelto a repetir, es inconciliable con nuestra tradición de liberalismo, de la que no podemos prescindir de ningún modo.

Pero la comisión se coloca en un punto de vista tan cerrado, que ni siquiera se aviene a borrar estas últimas expresiones: «debiendo tenerse en cuenta para fijar el porcentaje de colonos extranjeros la aptitud de asimilación de los mismos». Yo estoy viendo al consejo agrario recurriendo a no sé qué cartabón para determinar la aptitud de asimilación de los extranjeros.

Hay que tener confianza, señores miembros de la comisión, en el país, en su influencia de asimilación. No hay nacionalidad extranjera que resista. Podrá hacerlo en la primera generación; en la segunda, en los descendientes, ya no quedan ni trazas del espíritu intransigente de sus padres. Yo hubiera deseado que concretamente se citara un temor serio. No creo que circunstancias vinculadas a los últimos sucesos a que se refería el señor diputado Guillot y que son meramente contingentes, puedan hacernos variar un criterio que hemos mantenido siempre de conformidad con los principios liberales de nuestra Constitución y de la ley de inmigración.

Por éstas breves razones, y buscando la conciliación, sin perjuicio de creer que todo el artículo 27 podría desaparecer sin desmedro para la ley, voy a votar en la forma indicada por el señor diputado Guillot. Y en caso de que su proposición fuera rechazada, voy a pedir votación por partes, para que por lo menos radiemos esta frase antipática: «debiendo tenerse en cuenta para fijar el porcentaje de colonos extranjeros la aptitud de asimilación de los mismos».

He terminado.

Sr. Horne. — Pido la palabra.

Evidentemente, el señor diputado por la Capital —que conoce los problemas agrarios y que ha hablado con la elocuencia de costumbre— se ha salido del asunto. Nos coloca en una situación en la cual no estamos.

Pareciera que estuviéramos, en materia de inmigración, en contra de los principios que hemos sostenido en esta Cámara. Vuelvo a repetir que en esto no hay ninguna cuestión contra los extranjeros; que sólo se trata de su ordenamiento dentro de las propias colonias y que, en lo que amí respecta, no estoy de acuerdo con la fijación del porcentaje de ex-

tranjeros, pero sí de su ubicación, de una única nacionalidad, dentro de las colonias.

No hemos tenido en cuenta solamente la legislación de otros países, sino nuestra propia experiencia. He recorrido algunos territorios nacionales con colonias formadas por extranjeros de una sola nacionalidad, en las que todavía, a pesar de ser algunos de los colonos hijos nacidos en el país de segunda generación, no saben hablar castellano.

Conoció colonias en Misiones formadas por hombres nacidos en el país, hijos de colonos alemanes, llamados a sí mismos brasileños alemanes, que no conocen absolutamente nada del país en que nacieron y que no saben hablar ni el portugués ni el castellano.

Colocándonos en un terreno ampliamente liberal, yo acepto que pongamos una disposición de orden práctico que tienda a evitar que los colonos se acoplen por nacionalidades impidiendo la penetración de las ideas argentinas en su medio; que no tengan nuestra misma escuela, nuestros mismos métodos de trabajo y nuestras propias costumbres. Queremos que esos colonos que han venido a nuestro país se acojan no solamente a la liberalidad de nuestras leyes sino que se compenetro de nuestras costumbres, de nuestra vida y se asimilen a nuestra nacionalidad.

Ese es el concepto que entiendo es el único que busca la ley y que es más bien de orden práctico que doctrinario.

Muchas de las colonias instaladas después de la ley de colonización, de la ley de 1876— y antes todavía de existir ninguna ley, luego de la organización nacional— se han asimilado a nuestro medio; pero la asimilación ha sido lenta y nosotros queremos que sea más intensa por medio de este procedimiento.

En consecuencia, yo aceptaría la derogación de este porcentaje que se establece en el segundo apartado pero dejando en la ley el concepto de que en las colonias a formarse no pueden incorporarse colonos de una sola nacionalidad y que el consejo agrario tendrá en cuenta las condiciones de adaptabilidad de los extranjeros, no por razones raciales, de religión, ni de otra clase— no nos salgamos del problema y no confundamos—, sino para evitar que se agrupen, cerrándose, y contrariando el concepto que he expuesto, que nadie puede desconocer que se basa en la práctica, y en los antecedentes nacionales y en las dificultades que existen entre los colonos extranjeros para asimilarse a nuestra vida nacional.

Sr. Anastasi. — Yo deseo hacer una pregunta al señor diputado miembro informante.

¿En el momento actual hay tantas nacionalidades?...

Sr. Horne. — No es una ley del momento sino definitiva, permanente.

Sr. Anastasi. — ... que puedan traernos su aporte inmigratorio? No conozco muchas. La mayor parte de los países están cerrados a la inmigración y no veo cómo se va a hacer prácticamente esa distribución.

Sr. Guillot. — En substancia, la comisión acepta las modificaciones introducidas en el apartado 1º hasta el 75 %; rechaza la proposición de suprimir la segunda parte del artículo, y aun las líneas finales del mismo.

Sr. Horne. — El último apartado quedaría en forma que tradujera este concepto: que dentro de las colonias el consejo agrario no podrá ubicar colonos de una sola nacionalidad; debiendo tener en cuenta las condiciones y adaptabilidad de los mismos a los efectos de fijar el porcentaje.

Sr. Guillot. — Ese es el pensamiento que informa el segundo apartado.

He sostenido una tesis y la he concretado en una proposición. Solicito que se vote el artículo por partes: primero el primer apartado, en el que estamos contestes, con las modificaciones aceptadas; y después el segundo apartado.

Sr. Dickmann. — ¿El segundo apartado también por partes?

Sr. Guillot. — Sí, señor diputado.

En esa forma habremos resuelto el problema, lamentando que la comisión no haya aceptado una proposición que, como dijo el señor diputado Anastasi, corresponde al pensamiento liberal de la Constitución y se ajusta a la tradición colonizadora argentina.

Sr. Simón Padrós. — Pido la palabra.

En realidad esta ley, más que de colonización es de radicación, de adquisición de tierra por los colonos actuales. Creo que perturbaríamos sus finalidades mezclándola con el problema de la inmigración.

Hace un instante el señor diputado Dickmann creo manifestaba que quizá no habría suficiente cantidad actual de colonos que estuvieren interesados en el programa que define la ley de colonización. Quiero recordar al respecto dos cifras extraídas del Anuario Agropecuario de la Dirección de Economía Rural y Estadística, del año 1934-35, que es el último publicado. En cultivos de cereales y hno, sobre 154.000 chacras había solamente 55.000 propietarios, 100.000 son arrendatarios.

¿Cuál no será entonces el total de los actuales colonos que esperan ansiosos a que la ley de co-

lonización llegue para poder convertirse en propietarios?

Por esta razón considero muy acertados los conceptos expuestos por los señores miembros de la comisión.

Sr. Anastasi. — Que ésta es también una ley de inmigración lo dice el artículo 7º, inciso f), ya votado.

Yo no sé cómo se va a arreglar el consejo agrario para interpretar este inciso ante convenios con grupos de familias residentes en el extranjero, convenios que suponen familias de un solo país.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

El artículo que consideramos desea sólo y exclusivamente que las colonias tengan un porcentaje determinado de extranjeros y que el resto corresponda a los argentinos arrendatarios, para que puedan adquirir el dominio de la tierra. Quiero, pues, dejar sentado esto: que el artículo no establece ninguna restricción para la afluencia de inmigrantes; se refiere únicamente a la ubicación de los extranjeros en colonias determinadas estableciendo el porcentaje.

A los señores diputados que piden la supresión de la última parte del artículo deseo expresarles que ésta no es una ley que desde el primer momento vaya a cumplirse íntegramente, sino que lo será por etapas. Es lógico que empiece por radicar a los colonos de nacionalidades que se asimilen más fácilmente al país. Es indudable que se asimilan más fácilmente al país los colonos de raza latina —italianos, españoles, etcétera—, que tienen una mayor vinculación con nuestro país. Entonces, es lógico que las primeras tierras de que va a disponer el consejo, en virtud de esta ley que irá evolucionando lentamente, se adjudiquen a los argentinos y a los extranjeros que tengan mayor afinidad con los argentinos.

De manera que no habrá dificultad en que en esta primera ley, se comience con el criterio de que el consejo agrario tendrá en cuenta primeramente a esta clase de extranjeros, dentro de las normas establecidas por el artículo y de acuerdo a las razones expuestas por el señor diputado Horne.

Puede, pues, votarse, en la forma proyectada por la comisión con las modificaciones de redacción indicadas por el señor diputado por la Capital.

Sr. Anastasi. — En el debate sobre inmigración alguno de los señores ministros se refirió a un posible acuerdo con un grupo de familias de origen vasco.

Sr. Ministro de Agricultura. — Sr. señor diputado.

Sr. Anastasi. — Si se celebrara ese convenio, el consejo agrario tendría que diseminar a esas familias en diversas colonias.

Sr. Palacio. — Evidentemente.

Sr. Anastasi. — ¿Qué utilidad habría en proceder de esa manera?

Sr. Palacio. — Es más fácil la asimilación de un colono extranjero cuando está mezclado con colonos argentinos.

Sr. Anastasi. — Aceptemos la mezcla con colonos argentinos; aceptemos que el 25 % corresponda a colonos extranjeros. Pero, ¿por qué ese 25 % deberá estar integrado por colonos de diversas nacionalidades?

Sr. Vilgré La Madrid. — ¿Y qué perjuicio traería diseminarlos un poco?

Sr. Guillot. — Hemos señalado con anterioridad que hay una tendencia de las masas inmigratorias a radicarse dentro de grupos que les sean familiares, por comunidad de lengua y de hábitos. Eso estimula la inmigración y la radicación. Sostenemos así la tradición colonizadora argentina que no ha experimentado tropiezos.

Sr. Susan. — Pero eso es un peligro, como lo ha indicado el señor diputado Horne y está el ejemplo de las colonias extranjeras del sur del Brasil, y algunas de Misiones y del sur argentino.

Sr. Anastasi. — ¿Qué tiene que ver eso?

Sr. Susan. — Que no se adaptan al país ni a sus costumbres.

Sr. Anastasi. — Voy a recordar al señor diputado por Buenos Aires que se manifestó también que se estaban efectuando activas gestiones para radicar suizos y holandeses, en cumplimiento de tratados. La aplicación de esos tratados originará dificultades al ministerio, porque habiendo pensado en la radicación de los holandeses en el Delta, por una razón de similitud con el territorio de su país de origen, no se podrá realizar ese propósito y habrá que esparcir a los holandeses en distintas zonas.

Sr. Horne. — Pido la palabra.

Respecto a la primera parte del artículo no hay discusión.

En cuanto al segundo párrafo, para que no haya duda alguna sobre el criterio de la comisión, que no es establecer restricciones a la inmigración, hemos preparado la siguiente redacción que sometemos a consideración de la Cámara como despacho: «El consejo agrario determinará el porcentaje de colonos extran-

jeros por nacionalidades que serán ubicados en las colonias».

Ese es el último apartado que la comisión propone y pide que se someta a consideración de la Cámara.

—Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Honorable Cámara, don Juan G. Kaiser.

Sr. Guillot. — ¿Ese es el criterio de la comisión?

Sr. Horne. — Es el criterio que hemos fundado nosotros.

Sr. Anastasi. — Pero no estaba expresado conforme a ese criterio.

Sr. Horne. — Tal vez con un poco de suspicacia se puede entender lo contrario.

Sr. Dickmann. — Acepto la redacción dada al último párrafo del artículo.

Sr. Horne. — Quedaría en esta forma: El consejo agrario determinará el porcentaje de colonos extranjeros por nacionalidad que serán ubicados en las colonias.

Sr. Palacio. — Antes de votarse el artículo, propongo una modificación de forma. En la primera parte se deja la palabra «refiere»; la segunda palabra «refiere» habría que sustituirla por la palabra «alude», y la última palabra «refiere» sustituirla por la palabra «menciona». Cuando se lea el artículo, pido que se haga con este cambio de términos.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Para dejar a salvo mi opinión personal sobre este artículo del despacho.

Si no he oído mal, la mayoría de la comisión acepta que se modifique la primera parte del artículo 27, de acuerdo con la sugestión del señor diputado por la Capital doctor Guillot, que substituye el «mínimo» del 75 %, que se reservaba en la primera redacción para las familias argentinas, por el «máximo» del 75 % sin establecer ningún mínimo, lo que significa decir que pueden reducirse esas adjudicaciones hasta un 5 %. Esto se hallaría en contradicción con algunas manifestaciones que acabo de oír a los señores diputados miembros de la comisión que entienden que se mantiene siempre el mismo porcentaje de la tierra a colonizar.

Sr. Horne. — No hay ninguna contradicción. Lo que hemos aceptado es para darle mayor elasticidad al artículo manteniendo el concepto fundamental.

Sr. Ruggieri. — En realidad hay un vuelco fundamental en el concepto originario de este artículo. El despacho habla de un mínimo del

75 %, y ahora se prescinde de todo mínimo y se establece el 75 % como máximo.

Sr. Guillot. — ¿Qué inconveniente percibe el señor diputado en esa manifestación?

Sr. Ruggieri. — Observo que hay una modificación fundamental en el concepto del despacho. Me explico que se acepte «hasta» el máximo del 75 %, de acuerdo con la sugestión del señor diputado; pero partiendo de algún mínimo, que ahora desaparece totalmente del proyecto.

Sr. Guillot. — Lo que se ha querido expresar — y en eso creo interpreto bien el pensamiento de la comisión—, es el predominio de la población argentina sobre la extranjera...

Sr. Ruggieri. — Si no se establece el mínimo no aparece ese pensamiento en el texto del artículo...

Sr. Guillot. — ... previendo siempre la posibilidad de hacer una colonización mixta. Si la ley debiera ser aplicada por personas foráneas, extrañas al sentimiento nacional, desconocedoras de los fenómenos argentinos, se podría entonces temer que se reduzca al mínimo del 5 % la población argentina, y se deje el 95 % al extranjero. Pero el señor diputado ignora que hay un criterio de racionalidad para aplicar la ley. En la aplicación de la ley se percibe y se ejecuta el pensamiento evidente que ha guiado a la comisión, y en este caso no hay duda de cuál es la finalidad perseguida por el artículo. Si bien no se establece un mínimo, se limita el máximo para evitar el peligro contrario: la exclusión de extranjeros; pero el consejo agrario nacional —formado como lo establece la ley— aplicará estas normas dentro del concepto nacionalista que preside el despacho en toda su estructura.

Sr. Susan. — Yo comparto la opinión del diputado por la Capital, doctor Ruggieri. El apartado b) del artículo 26 establece: «deber ser de nacionalidad argentina o extranjera con residencia mayor de cinco años». Se trata, pues, de agricultores que están en el país, posiblemente arrendatarios que quieren ser propietarios. Estableciendo una elasticidad, fijando un porcentaje que oscile entre el 30 y 40 por ciento de extranjeros, por ejemplo, puede resultar un número excesivo de extranjeros que se conviertan en propietarios, lo que me parece absurdo.

Sr. Anastasi. — ¡Que va a ser absurdo! Es lo que siempre ha hecho el país; provocar la afluencia de extranjeros.

Sr. Susan. — Es completamente distinta la época actual de la anterior.

Sr. Anastasi. — ¡Cómo va a ser distinta! Tenemos cuatro habitantes por kilómetro cuadrado; somos un país desierto.

Sr. Guillot. — Por otra parte, no olvide el señor diputado por Santa Fe que esta ley no se dicta para ser aplicada en un momento anormal del mundo como es éste. La ley que dictamos se desenvolverá con el andar del tiempo y debemos confiar en que la anomalía del momento actual desaparecerá.

Sr. Susan. — El despacho se refiere a los agricultores que estén trabajando en el país y que tengan residencia de cinco años.

Sr. Guillot. — Se les da preferencia.

Sr. Susan. — Por eso hasta cierto punto acepto el mínimo que la comisión había proyectado.

Sr. Palacio. — Podrían conciliarse los puntos de vista aparentemente contradictorios que sostienen los señores diputados Guillot y Ruggieri, estableciendo que cuando el artículo dice que se reserva «hasta el 75 %» para argentinos es a los efectos de la preferencia simplemente. Puede resultar que sea admisible permitir la llegada de extranjeros en un porcentaje que en lugar del 25 sea del 27 o del 28. El concepto fundamental que inspira a la comisión es el siguiente: que haya dos terceras partes de argentinos y el resto de extranjeros. Como la ley debe ser aplicada con esta inteligencia no podría mañana el consejo agrario dividir las tierras, entregando el 50 % a argentinos y el 50 % a extranjeros si existen argentinos que cubran el 75 por ciento.

Con ese concepto, o sea que la distribución se haga en dos terceras partes de los argentinos y una tercera parte de extranjeros, podría hacerse la adjudicación a unos y otros dentro de esas normas.

Sr. Ruggieri. — Como conclusión de mis observaciones yo iba a proponer que en lugar del «hasta 75 %» se dijera: «del 50 al 75 %»; pero después de las manifestaciones que acaba de formular el señor presidente de la comisión en nombre de la mayoría, y que servirán como antecedente para interpretar la ley en el momento en que el consejo deba aplicarla, no insisto en la indicación.

Sr. Labayen. — Pido la palabra.

Voy a proponer a mis compañeros de comisión que este artículo 27 lo posterguemos hasta mañana, para darle una redacción que contemple todas las objeciones que se han expresado. Ya se está variando fundamentalmente el concepto del artículo y declaro que yo, como miembro de la comisión no lo conozco, por-

que ya resulta una cosa nueva a fuerza de aceptar modificaciones.

El concepto del despacho era el siguiente: que el 75 % no era sólo para argentinos, sino para colonos argentinos y extranjeros con cinco años de residencia; el resto era para extranjeros que íbamos a incorporar a la colonización y a la República Argentina.

Si establecemos una disposición que diga «hasta», se va a producir la situación a que aludía el señor diputado Ruggieri. Hemos abusado de palabras para señalar la conveniencia —y el señor diputado Dickmann ha expresado conceptos muy claros— de la «mestización» para que predominen en las colonias, ciudadanos argentinos o extranjeros ya radicados y a los que se presupone con amor al país. Así se puede hacer inmediatamente una asimilación de los extranjeros. Si dejamos el artículo con las innovaciones que se proyectan, vamos a crear colonias extranjeras y vamos a establecer limitaciones a la posibilidad de formar colonias exclusivamente argentinas. Señalo esta injusticia. Es posible que lleguemos a constituir colonias exclusivamente extranjeras en toda su extensión menos el 1 %, porque cuando decimos «hasta» 75 %, se admite que pueda ser uno y dar el resto de la tierra a colonos extranjeros.

Cuando se trate de argentinos, se les negará la posibilidad de constituir una colonia de puros argentinos, porque es necesario un 25 % de extranjeros...

Sr. Anastasi. — No, señor diputado, porque el artículo dice «podrá reservar».

Sr. Labayen. — A pesar de todas las palabras que se digan, la dificultad existe y por eso deseo que se postergue este artículo hasta mañana, en que los miembros de la comisión, permeables a todas las indicaciones buenas, podrán traer una solución que contemple el espíritu de la comisión y el pensamiento de la Cámara.

Sr. Horne. — Pido la palabra.

Creo que no existe ninguna contradicción y que en rigor todos estamos de acuerdo. Este artículo no excluye la posibilidad de formar colonias argentinas, porque emplea el término «podrá». Quiere decir que es facultativo. Se podrá reservar un porcentaje para extranjeros...

Sr. Labayen. — ¿Qué quiere decir, entonces, «hasta el 75 %»?

Sr. Simón Padrós. — Ese porcentaje se refiere a los predios; no a los colonos.

Sr. Horne. — Y dentro de las condiciones que establece el artículo anterior. Si hay argentinos hasta un 75 %, la ley autoriza a que se les dé preferencia, que por otra parte ya tienen por artículos votados, pero si hubiere más extranjeros y no hay argentinos en condiciones de ubicarse, este porcentaje, de acuerdo a la redacción aceptada por la comisión, permite aumentar el número de extranjeros. Lo único que hemos quitado es la rigidez que el artículo tenía anteriormente. Estamos todos de acuerdo y por eso no hay inconveniente en que se vote, porque está bien redactado.

Sr. Dickmann. — Pido que se lea el artículo en su nueva redacción.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El artículo 27 del despacho, ahora 28, dice: «El consejo adjudicará, dentro de las colonias a que se refiere el artículo 33, hasta el 75 % de los predios que resulten, una vez efectuada la subdivisión a los agricultores a que alude el artículo anterior y podrá reservar la extensión restante para adjudicarla a los que lleguen del extranjero en virtud de los convenios que menciona el inciso f) del artículo 7º.

«El consejo agrario determinará el porcentaje de los colonos extranjeros por nacionalidad que serán ubicados en las colonias.»

Sr. Dickmann. — Considero que está bien y que podemos votarlo con la conciencia tranquila.

Sr. Palacio. — Sobre todo después de las explicaciones que se han dado.

Sr. Simón Padrós. — Pido la palabra.

Deseo hacer una brevísima aclaración, porque no quisiera que quedara en el ambiente del recinto y en el Diario de Sesiones algunos conceptos expresados en forma gráfica por los señores diputados. Han hablado de que esta mezcla de colonos podría permitir una mestización de los criollos y creo que han querido significar que permitiría el acriollamiento de los extranjeros.

Es la aclaración que quería hacer.

Sr. Dickmann. — Si la mestización quiere decir acriollamiento, no tengo inconveniente.

Sr. Labayen. — Sostengo que cuando la comisión se serene, habrá de comprender que hay una contradicción en este artículo.

Sr. Pita. — La moción del señor diputado por Entre Ríos es de orden, porque significa la postergación.

Sr. De Miguel. — Pido la palabra.

Voy a proponer una redacción distinta de la primera parte del artículo, porque tal como está resulta difícil de entender.

Propongo que el artículo diga así: «El consejo adjudicará a los agricultores a que se refiere el artículo anterior y dentro de las colonias que deben organizarse de acuerdo con el artículo 34, una vez efectuada la subdivisión, hasta el 75 % de los predios que resulten, reservando el tanto por ciento de la extensión restante para los que lleguen del extranjero en virtud de los convenios que menciona el inciso f) del artículo 7º.» Es una cuestión de sintaxis.

Sr. Osorio. — Así queda mejor redactado.

Sr. Guillot. — Debe decir: «reservando la extensión restante».

Sr. Dickmann. — No vamos a hacer ahora una cuestión gramatical. Me parece que el artículo redactado por la comisión, ahora es perfectamente claro y aceptable.

Varios señores diputados. — Que se vote.

Sr. Presidente (Kaiser). — ¿El señor diputado por Entre Ríos insiste en su moción de aplazamiento?

Sr. Labayen. — Para no perturbar la labor de la Cámara la voy a retirar, porque antes de que termine la sanción de la ley puedo pedir la reconsideración del artículo.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo en la forma leída.

—Se vota y resulta afirmativa

—En consideración el artículo 28 del despacho, que pasa a ser 29.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

De las exposiciones del señor miembro informante de la comisión y de otros diputados de la misma, al discutirse en general el despacho, se infiere que el pago del saldo del precio de venta, una vez abonado el 10 % de que habla el artículo 24, debe garantizarse con el derecho real de hipoteca constituido sobre los predios que se vendan o adjudiquen. Ese es, por otra parte, el concepto general del proyecto despachado por la comisión.

Pero observo que en ningún artículo se habla concretamente de la constitución de esa hipoteca. Por eso me parece conveniente que en la primera parte del que está en discusión se diga: «Por el saldo de venta se constituirá hipoteca a favor del consejo y será abonado», etcétera.

Sr. Simón Padrós. — Sería mejor que dijera «el saldo del precio de venta».

Sr. Ruggieri. — Eso es. Entonces diría: «Por el saldo del precio de venta se constituirá hipoteca a favor del consejo y será abonado».

etcétera, porque después, como verá la Honorable Cámara al tratarse el artículo 29, se hace alusión al crédito hipotecario del consejo, no obstante no aparecer en ningún otro artículo la constitución del gravamen.

Sr. Palacio. — El artículo no establece la obligación de la hipoteca, porque el consejo agrario transfiere la propiedad, mediante la correspondiente escritura, una vez que se ha amortizado el capital. No es necesario, pues, imponer la obligación de la hipoteca.

Sr. Ruggieri. — Yo no sé, señor presidente, si ése es el concepto de la mayoría de la comisión, pero estaría en contradicción con lo que establece el artículo 29, según el cual una vez amortizado el 50 % del precio de venta, el consejo agrario transfiere su crédito hipotecario por el otro 50 % al Banco Hipotecario Nacional.

Sr. Palacio. — En ese momento el consejo agrario se deshace de esta propiedad para que el colono quede con la hipoteca del Banco Hipotecario.

Sr. Ruggieri. — El señor diputado por Córdoba no percibe mi argumento. El artículo 29 habla de la transferencia de un crédito hipotecario que, desde luego, se supone existente; pero ¿en qué otra disposición del despacho nosotros hemos establecido la constitución de la hipoteca que se transfiere al banco?

Desearía que la comisión informe a la Honorable Cámara sobre lo siguiente: si una vez pagado el 10 % del precio, por el resto se garantiza, o no, su cobro, con el derecho real de hipoteca sobre el terreno vendido.

Sr. Palacio. — No, señor diputado, porque cuando el colono paga el 10 %, todavía no se le extiende la escritura pública de dominio. Pero una vez que haya amortizado el 50 % y el colono pueda seguir atendiendo la deuda con cédulas que emite el Banco Hipotecario Nacional, se hace la transferencia y se constituye la hipoteca.

Sr. Zara. — Entonces el artículo 30 está mal.

Sr. Ruggieri. — El artículo 29 está mal, entonces, porque habla de la transferencia de un crédito hipotecario que, según aclara el señor presidente de la comisión, no existe. Pregunto, ¿a qué transferencia se refiere el artículo 29?

Sr. Zara. — Pido la palabra.

Quiero agregar esto: el artículo 30 habla de la transferencia del predio, lo que hace presumir que se da *ab initio*, apenas se presenta la operación, el título de propiedad al colono, porque si no, no podría transferir el derecho

de propiedad sobre el predio, sino los derechos y acciones que surgieran de la ley.

Me parece pertinente la observación que formula el señor diputado.

Sr. Susan. — El artículo 29 va a quedar claro, a mi entender, suprimiendo las palabras «del crédito hipotecario». Diría: «Cuando se haya reducido el 50 % el saldo del precio de venta, el consejo solicitará su transferencia», etcétera.

Sr. Palacio. — En el artículo en discusión estamos estableciendo simplemente la forma como seña de hacer el pago, con prescindencia de los títulos que va a tener el propietario.

Sr. Barrau. — Pido la palabra.

Es evidente que los artículos 28, 29 y 30 tienen estrecha relación. No se puede hablar de constituir hipotecas si el que compra no tiene título de dominio. El artículo 28 habla de que el adquirente va a tener el dominio. Ahora el señor miembro informante aclara que va a ser en la oportunidad en que la amortización llegue al 50 por ciento.

Sr. Palacio. — Cuando se discuta el artículo 29, voy a hacer una aclaración para dejar bien establecido el concepto; pero pido al señor diputado por la Capital consienta que votemos el artículo 28 tal como está redactado por la comisión, en el concepto de que no alude más que a la forma de hacer los pagos.

Sr. Barrau. — Tienen una vinculación muy estrecha estos artículos. Conviene que quede aclarado que el colono no tendrá dominio de su tierra hasta que llegue a pagar el 50 %; que no es suficiente el pago del 10 por ciento. ¿Es ése el pensamiento de la comisión, o no?

Sr. Palacio. — Sí, señor

Sr. Barrau. — Eso no lo dice la ley, como tampoco dice quién va a expedir las escrituras. ¿No podría establecerse que habrá escribanos en el consejo agrario que lo hagan?

Hay que aclarar estos dos puntos. En cuanto a la redacción del artículo 29, habría que modificarlo, porque si el consejo no va a tener el dominio de la tierra, no podrá solicitar el préstamo al banco. El préstamo debe solicitarlo el que tenga el dominio.

Sr. Ministro de Agricultura. — Pido la palabra.

Entiendo que el concepto de la comisión, al establecer el artículo tal como está redactado, fué que mientras el agrario no pagase el 50 por ciento de su transferencia al Banco Hipotecario Nacional, el predio no estaba vendido sino que había solamente una promesa de venta.

Estoy de acuerdo, por otra parte, con el

concepto del artículo 30 cuando expresa que el predio no podrá ser transferido mientras no haya pasado el valor del mismo al Banco Hipotecario.

Sr. Zara. — Pero la última parte del artículo 30 es más categórica. Dice: «Sin este requisito los registros de la propiedad no anotarán transferencia alguna de dominio de los predios vendidos a los agricultores por el consejo.»

Sr. Ministro de Agricultura. — Cuando hayan pagado el 50 por ciento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Lo que está en discusión es el artículo 29, que en el despacho figura como 28.

Sr. Ruggieri. — Sí, señor presidente; pero como el artículo 28 está estrechamente vinculado con los artículos 29 y 30, es útil la aclaración que hace la comisión con respecto al contenido y alcance del 28, porque nos servirá de antecedente para precisar la disposición del artículo posterior, eliminando la parte que se refiere a un crédito hipotecario que la comisión ahora declara inexistente. El artículo 29 establece que en el momento en que recién deba constituirse el dominio a favor del comprador, se hará por el consejo al Banco Hipotecario Nacional la transferencia de un crédito hipotecario que no ha tenido vida jurídica. Es conveniente aclarar eso.

Sr. Palacio. — Por eso voy a pedir la modificación del artículo 29, invitando a los señores diputados a que voten el 28 en estos términos.

Sr. Ruggieri. — En esa forma acepto el artículo 28, ahora 29, en la forma que viene redactado, pero expresando en la primera parte «el saldo del precio de venta» y no «el saldo de venta».

Sr. Ravignani. — Es más preciso.

Sr. Maino. — En el inciso a) haría falta agregar la palabra «anuales», porque supongo que los porcentajes que se establecen no son mensuales sino anuales.

Sr. Guillot. — Tiene razón el señor diputado.

Sr. Maino. — Podría intercalarse la palabra «anuales» después de donde dice «del medio por ciento».

Sr. Horne. — Podría decirse entonces «Con una amortización anual acumulativa», etcétera. Así comprende todo, aunque se entendía.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a leer.

Sr. Secretario (González Bonorino). — Artículo 28, ahora 29: «El saldo de precio de venta será abonado: a) Con una amortización anual acumulativa del medio por ciento e intereses del dos y medio por ciento, hasta reducirlo al 50 por ciento. Los vencimientos se fijarán en

la fecha de mayor ingreso de la explotación; b) Con una amortización anual acumulativa e intereses iguales a los que estén en vigencia en el Banco Hipotecario Nacional el 50 por ciento restante.

«Los compradores podrán en cualquier época efectuar amortizaciones extraordinarias en la forma que determine la reglamentación.»

El señor ministro propone como inciso c), nuevo, el siguiente: «La deuda será reducida en un 3 por ciento de su valor inicial por cada hijo legítimo nacido en la propiedad, al alcanzar dos años de edad, después del segundo hijo vivo, antes o después de instalado en ella.»

Sr. Ministro de Agricultura.—Cuando se discutió la ley en general manifesté que iba a proponer la inclusión de un inciso en el artículo 28.

En la pequeña propiedad rural la madre forma parte integrante de los que trabajan y ayuda en la explotación del predio, ya sea en los quehaceres hogareños, en el trabajo de la granja, o aun ocasionalmente en la explotación principal. Lógicamente en los tres últimos meses del período prenatal, y en los seis o doce meses posteriores al nacimiento del hijo, su capacidad de trabajo disminuye y merma la posibilidad de producción; y aun aumenta el costo cuando es reemplazada por otra persona. Para contemplar esa circunstancia es que someto a la consideración de la Honorable Cámara el inciso que se acaba de leer.

Sr. Palacio.—La comisión acepta.

Sr. Presidente (Kaiser).—Se va a votar el artículo 28, ahora 29, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 29, ahora 30.

Sr. Palacio.—Pido la palabra.

Sr. Ruggieri.—Pido la palabra.

Sr. Palacio.—Si el señor diputado va a proponer la modificación de este artículo...

Sr. Ruggieri.—Sí, señor diputado.

De acuerdo con las aclaraciones que se han formulado al tratarse el artículo anterior, propongo que en reemplazo del que está en discusión se acepte el siguiente: «Cuando se haya reducido al 50 por ciento el saldo del precio de venta, el consejo transferirá su crédito al Banco Hipotecario Nacional, recibiendo «cédulas hipotecarias por su valor nominal.»

Sr. Palacio.—Pido la palabra.

El artículo que voy a proponer, es más o menos como el que acaba de presentar el señor diputado por la Capital. Dice: Cuando el saldo

amortizado más el monto acumulado en el fondo de ahorro alcance al 50 por ciento del precio de venta del predio, el consejo solicitará su transferencia al Banco Hipotecario Nacional, recibiendo cédulas hipotecarias por su valor nominal.

En esta forma quedaría más claro el artículo.

Sr. Ruggieri.—En lugar de «solicitará», debe decir «transferirá».

Además debe expresarse en forma concreta el objeto de la transferencia. Debe decir que lo que se transfiere es el crédito que tiene el consejo agrario contra el comprador.

Sr. Barrau.—Pero no dice cuándo tiene el dominio.

Sr. Ruggieri.—Eso viene después.

Sr. Palacio.—Podría aceptar la redacción del señor diputado, pero con la modificación referente al fondo de ahorro, que forma parte del préstamo. Habría que agregar entonces esas palabras.

Sr. Osorio.—No debe ser imperativa la transferencia al banco.

Sr. Ruggieri.—Debe ser imperativa, porque el propósito es dotar al consejo agrario de los fondos necesarios para proseguir su plan de colonización. Para eso recibe las cédulas, con el fin de negociarlas en el mercado.

Sr. Lezica Alvear.—Si no fuera imperativa, se podría taponar la transferencia.

Sr. Simón Padrós.—Cambia completamente el alcance de la disposición según que en la redacción del artículo se establezca como lo propone la comisión, «solicitará su transferencia al Banco Hipotecario Nacional», o, como dice el señor diputado por la Capital, «transferirá». No me opongo que sea en una u otra forma, pero l'amo la atención de la Cámara sobre que ello altera fundamentalmente el alcance de la disposición. Además, puede o no estar el Banco Hipotecario Nacional en condiciones de acordar esa transferencia. Por eso me parece muy prudente la redacción dada por la comisión.

Sr. Ravignani.—¿No importaría modificar la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional si lo queremos obligar a que acepte la transferencia de un crédito? Es una cuestión muy seria.

Sr. Palacio.—Queda mejor poner «solicitará».

Sr. Ruggieri.—El Congreso puede modificar las reglas de la ley orgánica del banco.

Sr. Ravignani.—Sí, pero en la ley orgánica del banco.

Sr. Palacio.—La comisión pide que se vote en la forma que lo ha propuesto.

Sr. Iriondo. — Después de esta breve discusión yo pediría al señor miembro informante que nos aclarase qué disposición se refiere a la transferencia de dominio a los compradores una vez pagado el 50 por ciento.

Sr. Palacio. — No es necesario establecerlo, porque el artículo dice que una vez que se pague el 50 % se hará la transferencia del crédito al Banco Hipotecario Nacional; y el señor diputado sabe que el banco no acepta títulos que no consten en escritura pública.

Sr. Iriondo. — Pero debe establecerse que una vez pagado el 50 %, la propiedad debe ser transferida al comprador.

Sr. Palacio. — Implícitamente está dicho.

Sr. Iriondo. — No basta que esté implícito. Creo que la oportunidad de establecerlo es este artículo 29 que se está por sancionar.

Sr. Ministro de Agricultura. — Entiendo que el espíritu de la comisión está claramente fijado en el artículo 30. El dominio no se transmite mientras no se transfiera el crédito al Banco Hipotecario Nacional.

Sr. Iriondo. — El artículo 30 establece que los compradores no podrán enajenar a propiedad. ¿Cómo van a enajenarla si no tienen título a su favor?

Sr. Anastasi. — Es necesario que el señor miembro informante de la comisión nos diga en qué momento comienza el pleno dominio a favor del comprador.

Sr. Palacio. — Cuando haya saldado el crédito hasta el 50 % para que lo pueda aceptar el Banco Hipotecario, y cuando haya pagado la totalidad del precio si no recurre al Banco Hipotecario.

Sr. Anastasi. — En la ley debe haber un texto expreso que indique el momento en que comienza el dominio a favor del agricultor. Según lo que he oído, la comisión entiende que el agricultor tiene una simple promesa de venta hasta que haya oblado el 50 %. Sería conveniente expresarlo en el artículo 29.

Sr. Barrau. — Pido la palabra.

La forma en que se está haciendo la discusión de este artículo me ratifica en que efectivamente hay que consignar en él una disposición relativa a la transmisión del dominio. Es sabido que sin dominio no hay hipoteca. Quizás está en el pensamiento de la comisión que se puedan realizar los trámites para la hipoteca sin tener todavía el dominio para que los dos actos puedan realizarse simultáneamente, pero, evidentemente, la letra del artículo, no lo dice. Por eso voy a proponer en reemplazo de este artículo el siguiente: «Cuando se haya re-

ducido al 50 % el saldo del precio de venta, el consejo otorgará el dominio al comprador simultáneamente en la oportunidad del préstamo que se realice por el Banco Hipotecario Nacional». De esa manera el trámite ante el banco podrá hacerlo el mismo colono con el boleto de venta, o podrá hacerlo el consejo por cuenta del colono, pero evidentemente se deben realizar los dos procedimientos: venta del terreno, pago del 50 %, que se tramite el préstamo en el Banco Hipotecario Nacional y recién estará en condiciones de hacerse la escritura de transferencia y la hipoteca, que no puede hacer el consejo porque él no va a otorgar las cédulas, porque él no es el banco, que será el prestamista.

Evidentemente, hay que contemplar esa circunstancia, porque de lo contrario los colonos se van a encontrar con estas dificultades: los colonos que han pagado el 50 %, no tiene el título de propiedad; el consejo agrario, que si bien es titular del dominio, ya ha recibido el 50 % del precio y tiene la obligación de transferirlo. Entonces va a ir a pedir el préstamo al Banco Hipotecario Nacional, pero debe hacerlo por cuenta del colono. Hay que establecer una oportunidad simultánea, con economía de gastos, para que pueda hacerse el trámite en el Banco Hipotecario y simultáneamente la transmisión del dominio con la hipoteca, cuando estén acordadas las cédulas. Es imprescindible la modificación del artículo.

Sr. Iriondo. — Pido la palabra.

Coincidiendo con las observaciones del señor diputado por la Capital y propondré una redacción que creo aclarará la cuestión: «Cuando el saldo amortizado más el monto acumulado en el fondo de ahorro alcance al 50 % del precio de venta del predio, se otorgará la escritura de transferencia del dominio al comprador y se constituirá hipoteca por el saldo. El consejo solicitará la cesión del crédito hipotecario al Banco Hipotecario Nacional, recibiendo cédulas hipotecarias por su valor nominal».

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

Atendiendo las modificaciones que se proponen por los señores diputados Barrau e Iriondo, el artículo quedaría en esta forma: «Cuando el saldo amortizado más el monto acumulado en el fondo de ahorro alcance al 50 % del precio de venta del predio, se otorgará la escritura de transferencia al comprador, a fin de que el consejo pueda solicitar su transferencia al Banco Hipotecario Nacional, recibiendo cédulas hipotecarias por su valor nominal».

Sr. Barrau. — Perfectamente.

Sr. Palacio. — En esa forma se contemplan todas las observaciones.

Sr. Anastasi. — Sería conveniente que se diera lectura nuevamente de la redacción propuesta por el señor presidente de la comisión, porque creo que ella conereta todas las modificaciones que se han sugerido.

—Se lee.

Sr. Anastasi. — Para no repetir el término «transferencia», podría ponerse «la cesión de su crédito».

Sr. Osorio. — Pido la palabra.

Entiendo que hay un error en la redacción que propone ahora el señor presidente de la comisión, porque, de acuerdo a la forma en que están redactados los artículos 29 y 30, la transferencia de dominio no se hará hasta tanto el propietario futuro no haya abonado el 50 % del precio y el consejo no haya constituido la hipoteca. De manera que mientras no se haya pagado el 50 % y se haya constituido la hipoteca por el 50 % restante no se podrá hacer la transferencia de dominio.

Con la nueva proposición, se cambia la situación a que se alude en los artículos 29 y 30, es decir, se otorga la escritura antes de que se haya constituido la hipoteca, y el artículo 30 prohíbe en absoluto la venta hasta tanto no se haya cumplido ese requisito.

Entiendo que no hay nada que modificar al artículo 29, porque el Código Civil no establece otra forma de transferencia de dominio de los bienes inmuebles que la de escritura pública, como no puede hacerse tampoco hipoteca sino por medio de la escritura pública. Es evidente que cuando se ha pagado el 50 % del precio y se ha constituido la hipoteca sobre ese bien, recién entonces podrá otorgarse al comprador la escritura de dominio.

Sr. Ruggieri. — Se está haciendo una confusión respecto del contenido del artículo siguiente, cuya discusión convendrá aplazar hasta después de votado éste.

Sr. Iriondo. — Porque dice otra cosa el artículo 30.

Sr. Ruggieri. — Se podría aceptar la redacción que propuso el señor presidente de la comisión agregándole el siguiente párrafo: «En este caso, la transferencia del dominio al comprador será simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del banco».

Pido se dé lectura íntegra del artículo con el agregado que he propuesto.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a leer.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó).—Queda así: «Cuando el saldo amortizado más el monto acumulado en el fondo de ahorro alcanza al 50 % del precio de venta del predio, el consejo solicitará la transferencia de su crédito al Banco Hipotecario Nacional recibiendo cédulas hipotecarias por su valor nominal. En este caso la transferencia del dominio al comprador será simultánea con la constitución de la hipoteca a favor del banco.»

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo 29 del despacho, que ahora es 30.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 30 del despacho, ahora 31.

Sr. Palacio. — Pido la palabra.

La comisión va a proponer la supresión de la última parte de este artículo 30 del despacho que dice lo siguiente: «Sin este requisito los registros de la propiedad no anotarán transferencia alguna de dominio de los predios vendidos a los agricultores por el consejo».

Este párrafo es completamente innecesario, dado que el título de propiedad no se extenderá por el consejo a los colonos, sino cuando éstos hayan cancelado la totalidad del precio de compra, o bien cuando hayan abonado el 50 % al hacer la transferencia al Banco Hipotecario Nacional.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

Yo propondría a la comisión la supresión total del artículo 30, que ya no tiene razón de ser. La primera parte establece un supuesto inverosímil, ya que mientras no exista dominio transferido al comprador no podrá éste enajenarlo a una tercera persona.

Sr. Palacio. — Pero puede resultar, señor diputado, que el colono adquirente, que no tiene más que una promesa de venta hasta tanto se le extienda la transferencia de dominio, puede transferir esa promesa de venta a un tercero.

El artículo se pone en esta situación y por eso no puede suprimirse.

Sr. Anastasi. — Entonces, en lugar de «no podrán enajenar el predio», debería establecerse «no podrá transferir sus derechos al predio». Es una cuestión de hermenéutica jurídica.

Sr. Palacio. — Efectivamente, habría que aclarar esa expresión, reemplazándola por las palabras: «ceder sus derechos al predio».

Sr. Anastasi. — Voy a hacer la proposición —y ruego a la comisión la acepte, porque creo

que ella responde a su propósito— de modificar el artículo en esta forma: «Mientras los compradores no hayan cancelado o transferido el saldo de la deuda al Banco Hipotecario Nacional, no podrán ceder sus derechos sin consentimiento del Consejo», sin necesidad de agregar lo referente a la aceptación del nuevo adquirente, porque ya se sabe, y si no he entendido mal a la comisión, el agricultor tiene sólo una promesa de venta en tanto no haya pagado íntegramente el precio. Pero en cuanto ha pagado el 50 % y se ha constituido hipoteca a favor del Banco Hipotecario Nacional, en ese caso ya es propietario.

Sr. Palacio. — El derecho a la promesa de venta puede transferirse y el Consejo debe aceptar la persona del adquirente, porque la adquisición de estos predios no puede quedar librada a cualquier persona, sino que debe ser un agricultor que se encuentre dentro de las condiciones establecidas por la ley.

Sr. Osorio. — El consejo tiene que aceptar la persona del adquirente.

Sr. Pinto (h.). — Entonces la observación del señor diputado queda limitada a las palabras «ceder sus derechos».

Sr. Osorio. — Nada más. Ceder sus derechos al predio.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar el artículo 30 del despacho, ahora 31, en la forma de que se dará lectura, con la modificación aceptada por la comisión y la supresión del último párrafo.

—Se lee: Artículo 30 del despacho, ahora 31.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a leer el artículo.

—Se lee:

Artículo 31. — Mientras los compradores no hayan cancelado o transferido el saldo de su deuda al Banco Hipotecario Nacional, no podrán ceder sus derechos al predio, sin consentimiento del consejo y aceptación por éste del nuevo adquirente. Las transferencias deberán ser resueltas por el consejo dentro de los sesenta días de formulado el pedido correspondiente.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 31, que pasa a ser 32.

Sr. Simón Padrós. — Pido la palabra.

Deseo formular una aclaración que considero importante.

Temo que la aplicación del artículo 31, con la fijación del tipo de interés al 3 % como valor del posible arriendo, desvirtúe la finalidad de la ley. No olvidemos que en esta ley de colonización —que es más bien de ensayo de colonización, porque con 100.000.000 en ocho años, si la unidad económica fuera por ejemplo de 20.000 pesos, sólo podrían arraigarse 5.000 colonos— en esta ley de ensayo el objetivo es convertir el colono en propietario, para que la tierra sea de quien la trabaja, según la conocida frase del señor ministro de agricultura.

Si tal es el objetivo, no se ponga un artículo que sea para el agricultor un aliciente en el sentido de convertirlo en nuevo colono del consejo agrario, con un tipo de arriendo más barato que el que actualmente paga.

Observo, por otra parte, cierta contradicción de tipos de interés en los diversos artículos de la ley. Así, el artículo 20, en su inciso b) establecía en el despacho que la tasación del inmueble se haría por el cálculo de la renta neta probable, capitalizada al 5 ½ %. Por otro lado el artículo 65 establece que el consejo cobrará el 6 % de interés por toda deuda de plazo vencido. Quiere decir que como punto de arranque para la valoración de la tierra se hacía la capitalización al 5 ½ % de interés, y se multa con un ½ % más en los casos de atraso en el pago.

Si la fijación del valor de adquisición se realiza capitalizando al 5 ½ % parece lógico que en los casos en que el futuro adquirente no pueda seguir siendo candidato a tal y tenga que convertirse por circunstancias diversas, por desaliento o por imposibilidad financiera, nuevamente en colono, pague el tipo que sirve de base para la capitalización al fijar el valor de la tierra. Establecido para el valor de la operación el 5 ½ % de interés como presunta renta, creo que en caso de que el colono no pueda ser adquirente, no deba rebajarse ese interés, no como un recargo para el colono, ni tampoco para mantener las finanzas del consejo a un nivel de relativo desahogo y que pueda seguir manteniendo el ritmo de su marcha financiera, sino para que no se desvirtúe la finalidad central de la ley. Llamo la atención de la Honorable Cámara y de los señores miembros de la comisión sobre la posibilidad de que puedan ocurrir centenares de casos en que a los futuros propietarios les convenga más con-

vertirse en colonos al 3 %, que no seguir sirviendo un tipo de interés sobre un capital que les representa en concepto de tal el 5 y medio por ciento.

Por estas razones invito a la comisión, si las encuentra convincentes, a que en el artículo 31 se modifique el tipo de 3 %, aplicando el que sirvió a la comisión de base para la fijación del valor de la tierra.

Sr. Ministro de Agricultura. — Pido la palabra.

El artículo 31 concuerda con el 32 con las modificaciones que entiendo propondrá la comisión cuando se trate de dicho artículo.

En efecto: el arrendatario paga el 3 % mientras tiene ese carácter; pero cuando llega el momento en que ha de convertirse en propietario y no optara por arrendar ni por comprar, deberá abonar también como parte integrante del arriendo, el fondo de ahorro, que hasta ese momento hubiese acumulado. Por consiguiente, el arrendamiento no será de 3 % sino de 3 por ciento, más hasta el 4 % que puede exigírsele como fondo de ahorro.

Ahora bien; si el arrendatario decidiese comprar su predio, deberá entonces pagar el 10 por ciento al contado...

Sr. Simón Padrós. — El 10 % ya lo pagó.

Sr. Ministro de Agricultura. — ...más los intereses devengados al 2 ½ % por el término en que fué arrendatario.

Ese es el concepto del artículo 32 que se presentará a consideración de la Cámara.

Sr. Simón Padrós. — En primer término, señor ministro, naturalmente no puedo conocer el proyecto de modificación al artículo siguiente, y en segundo término hago notar que mientras tanto habrán pasado cinco años más, de acuerdo al tercer párrafo del artículo 31, porque el consejo está facultado para ampliar el término del arriendo.

Esta es, precisamente, la situación que he querido hacer notar a la Cámara. Es posible que haya muchos agricultores que no respetando el concepto de adquisición con el cual la ley se sanciona, se conviertan provisionalmente durante cinco años, y eventualmente más años ampliados por el consejo, en colonos, al 3 por ciento.

Sr. Ministro de Agricultura. — Podría alcanzar hasta el 7 por ciento.

Sr. Simón Padrós. — Pero de momento han pagado 3 %, han estado cinco o diez años — puesto que se faculta sin límite al consejo para ampliar el plazo—, y más tarde, si es un colono que no tiene responsabilidad para poder

efectivizar este saldo, ¿de dónde le va a cobrar el consejo?

Sr. Ministro de Agricultura. — De su fondo de ahorro.

Sr. Simón Padrós. — Lo cual no quita que durante cinco o diez años la finalidad de la ley haya sido perturbada por un candidato a colono.

Sr. Ministro de Agricultura. — La ley contempla el caso en el artículo 31, cuando establece el término de cinco años.

Sr. Castex. — Pido la palabra.

Yo voy a objetar el segundo apartado del artículo 31, que establece que el Consejo en cualquier momento podrá declarar la caducidad de este contrato cuando considere que el arrendatario no puede convertirse en propietario.

Me parece que crea derechos y obligaciones unilaterales, desde que obliga al arrendatario a mantenerse dentro del contrato y no establece la misma disposición para el consejo.

Es cierto que la finalidad de la ley es convertir a los agricultores en propietarios, pero por ello no puede la ley colocarse en el caso inhumano de no contemplar la situación de un hombre que tiene un contrato de cinco años y que por cualquier contingencia pierde la perspectiva de ser propietario; poniéndolo en la calle.

Sr. Palacio. — Hay otra disposición más adelante, que contempla el caso a que se refiere el señor diputado y que establece que el consejo podrá ampliar los plazos en casos de fuerza mayor.

Sr. Castex. — No me refiero a eso.

Lo que quiero es que el agricultor no pueda ser sacado de su predio mientras esté en vigencia el contrato de cinco años.

Sr. Palacio. — Si no se pone en situación de cumplir el contrato...

Sr. Castex. — Si no cumple el contrato, es otra cosa.

Sr. Lazo. — El artículo se refiere al caso de incapacidad manifiesta para llegar a ser propietario.

Sr. Castex. — Ese es el error.

Sr. Lazo. — Es el mismo caso resolutorio de los contratos privados.

Sr. Castex. — Eso es otra cosa, señor diputado.

Pero, por lo menos, debe permitirse a ese agricultor a terminar los cinco años, para lo cual ha tomado sus medidas y ha fijado ubicación en la tierra por ese tiempo.

Ahora, que se puedan ampliar los términos del contrato, eso será para los que mantengan

la perspectiva de ser propietario; pero cuando la han perdido, pierden en ese momento hasta el derecho de vivir en el predio que él ha querido alquilar por cinco años y se coloca en el caso de ser arrojado a la calle.

Sr. Palacio. — Este artículo tiende a colocar como arrendatarios a los colonos que no tengan en el momento de entrar al predio el 10 % que establece la ley para ser propietarios.

De acuerdo con las ideas que acaba de exponer el señor diputado, la ley le permite a ese colono que sea arrendatario y pague el arriendo que establece la ley; pero el concepto de la ley no es que existan arrendatarios, sino que lo sean transitoriamente con miras a ser propietarios. Si el colono, durante el término de arriendo, no prueba que es un individuo seleccionado, capaz de convertirse en propietario, la ley no tiene interés en seguir amparándolo: prescindir de él para que se ubique otro con aptitudes.

Sr. Castex. — Pero el país no puede prescindir de ese colono y de esa familia.

Sr. Palacio. — Esta ley no se propone dar permanencia a los arrendatarios; los consiente en cuanto van a ser propietarios. Si el colono, por su falta de aptitud, no se encuentra en condiciones de convertirse en propietarios...

Sr. Castex. — ¿Para qué se le hace un contrato de cinco años?

Sr. Palacio. — Porque se considera como período de prueba.

Sr. Castex. — Entonces que se lo deje hasta los cinco años.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

La objeción del señor diputado por Buenos Aires está perfectamente fundada, y la eliminación de esta disposición no conspira contra los propósitos de la ley.

El señor diputado por Buenos Aires sostiene que si se comprueba —y no constata— la incapacidad del arrendatario para hacerse propietario, el consejo agrario, al finalizar el término del arrendamiento, no lo renueve. Y así elimina al colono que no parece estar en condiciones de llegar a ser propietario.

En cambio, me parece inhumano, y hasta contrario a todas las disposiciones de la ley civil, cuando se trata de arrendamientos agrícolas, que se interrumpa de pronto el término del arrendamiento, para arrojar del bien arrendado, a quien parece no hallarse en condiciones de reunir la suma necesaria para hacerse propietario.

Sr. Palacio. — No la suma necesaria, sino

que evidencie que no tiene aptitudes para ser un agricultor.

Sr. Guillot. — Es obscuro eso de que no evidencia las condiciones necesarias; en todo caso, no traduce el verdadero pensamiento de los señores diputados, que han querido asegurar las condiciones del aspirante por disposiciones contenidas en la misma ley. Y no es admisible que en el curso del tiempo en que el arrendatario desarrolla sus actividades se compruebe de manera tan fehaciente, indubitable, una falta de capacidad que obligue la expulsión inmediata del predio arrendado. Entiendo que la precaución a adoptar sería la de no renovar el contrato.

Sr. Lazo. — Supongamos que ese agricultor, en el primer año de los cinco, manifieste su incapacidad, su negligencia para trabajar la tierra, ¿habrá que soportarlo cuatro años más? ¿Es eso lo que se pretende?

Sr. Castex. — Mientras cumple el contrato...

Sr. Lazo. — No se le podrá arrojar de inmediato pero al término de la cosecha deberá abandonar el campo.

Sr. Guillot. — Termino expresando que la sanción a aplicar sería la de no renovar el contrato. En caso que el arrendatario demostrara su incapacidad en forma que violara las condiciones del arrendamiento, se le aplicarían las disposiciones generales de la ley sobre la materia.

Sr. Piedrabuena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Kaiser). — La había solicitado antes el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Piedrabuena. — Desearía que el señor miembro informante me dijera si estos contratos de arrendamiento llevan implícito...

Sr. Presidente (Kaiser). — Tiene la palabra el señor diputado Susan.

Sr. Piedrabuena. — Disculpeme, señor presidente.

Sr. Susan. — Voy a hacer una proposición con la cual me parece se va a terminar esta discusión.

La observación del señor diputado Castex es pertinente. Si a los dos años se encuentra con que el colono no está en condiciones, no se le puede echar. No se podría hacerlo por las leyes actuales de arrendamiento...

Sr. Palacio. — No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son cosas completamente distintas.

Sr. Susan. — Se podría agregar al artículo: «que el consejo quedará facultado para declarar la caducidad de hecho.»

Sr. Labayen. — Pido la palabra.

Me parece que se están confundiendo los conceptos. El arriendo que prevé la ley de colonización tiene características especiales que se han olvidado en el momento de fundar la observación. Se ha hablado aquí de que por encima de todo está la economía del país. Lo ha dicho el señor diputado Castex.

Sr. Castex. — El señor diputado me atribuye una frase para darse el gusto de hacer un discurso. Si le conviene, acepto.

Sr. Labayen. — No necesito frases del señor diputado para hacer un discurso. Lo he entendido mal. Disculpeme.

No es posible que a un arrendatario de tierra destinada a la colonización por la circunstancia especialísima de no disponer del 10 % para tomar esa tierra en compra, se le pueda tolerar la permanencia en ella durante cinco años, si desde el primero ha demostrado su incapacidad para dedicarse a esa explotación. No es posible que se destine la tierra del consejo agrario para habitación de un señor que se dijo colono y que con ese título reclamó una parcela, prometiendo adquirirla con el tiempo. Ya prevé el mismo artículo que, cuando vendidos los cinco años, el colono, por circunstancias especiales, no atribuíbles a sus condiciones personales —como ser, malas cosechas, sequías, desvalorización de los cereales, o por otros factores extraños a su labor— no pueda hacer frente a los compromisos que significa la adquisición de la tierra, el consejo prorrogará los contratos por cinco o por diez años, hasta que se ponga en condiciones de comprar esa tierra. Pero si ese mismo ciudadano, desde que se instala en la tierra, demuestra que no tiene otra finalidad que vivir en ella sin explotarla, que no es colono, que no quiere ser colono, el consejo agrario no puede estar supeditado a la voluntad de ese supuesto colono, sin entregar la tierra a las posibilidades de otros que la puedan o la quieran trabajar.

Sr. Guillot. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Labayen. — Sí, señor diputado.

Sr. Guillot. — El señor diputado se refiere a un supuesto colono. Pero, ¿no está facultado el consejo, por otra disposición de la misma ley, para comprobar previamente la capacidad profesional y la comprueba, sabiendo que tiene cinco años de ejercicio en esta actividad?

Sr. Labayen. — Para los que vivimos en el campo y hemos estado cerca de los colonos, sabemos que no es bastante siempre, para ser colono y tener aptitudes para explotar la tierra,

poseer el arado, los caballos para arrastrarlo y algunos otros implementos agrícolas que a veces son el resultado de la herencia de un ascendiente que era capaz para el trabajo, y que muchas veces son el resultado de créditos mal acordados por las casas de comercio a hombres incapaces. El consejo agrario no puede analizar todos esos factores, considera que un colono se encuentra en condiciones, y lo deja entrar. Entonces, se trata de casos excepcionales. Si se trata de un aventurero que quiere ser colono y no tiene aptitudes para serlo, desde luego que el consejo agrario debe tener la elasticidad necesaria para juzgar si las obligaciones que significa el arrendamiento son atribuíbles a un hombre incapaz, indolente o falto de responsabilidad. Cuando el consejo compruebe que ese hombre no reúne condiciones para ser un elemento útil le dirá: usted se va porque no representa ninguna utilidad para la economía de la Nación, ni siquiera para el propósito de colonizar que tiene la ley.

Me parece que no hay que darle a este asunto mayor importancia.

Ojalá sean buenos todos los colonos porque entonces habrá muy pocos a quienes desalojar. El despacho de la comisión es claro en ese sentido y no hemos de modificarlo.

Sr. Piedrabuena. — Lo que quiero saber es si estos contratos de arrendamiento llevan implícita la cláusula resolutoria y si el consejo puede desalojar a los colonos sin necesidad de juicio tramitado en la forma que corresponde.

Sr. Labayen. — Así lo entiende la ley porque declara que el consejo tiene la facultad de decretar la caducidad de los contratos.

Sr. Piedrabuena. — ¿Quiere decir que administrativamente va a proceder al desalojo?

Sr. Labayen. — Sí, sin perjuicio de que si lo considerase necesario recurriera a los jueces y a la policía.

Sr. Repetto. — Pido la palabra.

Estoy de acuerdo con este artículo y no he creído nunca que pudiera dársele el alcance que acaban de atribuírle algunos señores diputados. He votado este artículo porque lo considero un elemento indispensable para la selección de los futuros chacareros propietarios. Es una manera de permitir a esos hombres que demuestren su aptitud, su capacidad y su disposición para llegar a ser propietarios. Este procedimiento se aplica ya en la provincia de Buenos Aires en la misma ley de colonización. Se ensayan primero las condiciones del aspirante a propietario, y si la experiencia da re-

sultados positivos, se lo considera un hombre en condiciones de serlo.

Sr. Piedrabuena. — ¿Así que al consejo se le atribuyen facultades judiciales?

Sr. Repetto. — Yo no le he atribuido funciones judiciales. Se trata de un procedimiento adoptado para ir seleccionando a los futuros agricultores propietarios. Porque es evidente que hay muchos agricultores que creen tener aptitudes y capacidad para ser propietarios...

Sr. Piedrabuena. — ¿No se le brinda al colono la oportunidad de defenderse?

Sr. Repetto. — Se le pone en condiciones de poder desarrollar toda su aptitud y no está sometido al terrateniente que lo explota y lo somete al pago de arrendamientos considerables. El señor diputado Simón Padrós hace un momento clamaba por este exiguo arrendamiento que se aplicará. De manera que no es el caso corriente del propietario que explota: se trata del Estado que quiere saber si ese futuro chacarero tiene o no las cualidades necesarias para llegar a ser propietario. Si no las tuviera, ese hombre transformado en propietario iría al fracaso y no llegaría nunca al resultado que se propone esta ley.

Yo no he entendido nunca que esta facultad que se atribuye al consejo sea un arma para perseguir con fines mezquinos, sino una manera de orientarse acerca de las aptitudes reales del aspirante a propietario. En tal sentido, yo he votado el artículo. Por otra parte, el mismo artículo autoriza este procedimiento con carácter administrativo, que no podría ser otro, pues de lo contrario el consejo se encontraría en presencia de dificultades insalvables.

Sr. Piedrabuena. — En el orden normal de las cosas existen procedimientos judiciales.

Sr. Repetto. — Que pueden resultar interminables. Ya sabemos lo que se puede hacer en ese terreno.

Sr. Acuña. — Pido la palabra.

Creo que el consejo agrario en presencia de un candidato a colono, a quien por circunstancias especiales que el artículo establece le da la tierra en arrendamiento, está en completa libertad para juzgar de sus condiciones, no después de haberlo firmado, porque ya se encontraría en presencia de un contrato de arrendamiento que liga tanto al consejo agrario, como al colono mismo. Si el colono cumple, por su parte, con las obligaciones que le impone la ley de pagar el arrendamiento, tiene evidentemente el derecho de estar asegurado en el mantenimiento del contrato.

El artículo establece que en todo momento y aun después de firmado el contrato, el consejo agrario estará en condiciones de despedir a este colono porque resuelva, en cualquier momento, que no tiene las condiciones suficientes para continuar como colono, aun cuando este colono cumpliera religiosamente con el pago del arrendamiento. Eso es contrario a un principio de derecho civil que está consagrado en una disposición expresa del código, que declara nula toda convención por la cual una de las partes se reserve el derecho de anular por su sola voluntad el convenio concertado.

Por eso conceptúa que esta parte del artículo debe ser eliminada. Mientras el arrendatario cumpla con las obligaciones que le son inherentes y pague el arriendo, no puede reservarse el consejo la facultad de decidir por sí y ante sí, unilateralmente, la rescisión del contrato.

Sr. Palacio. — La comisión, por las razones ampliamente expuestas, mantiene íntegramente el artículo de su despacho.

Sr. Simón Padrós. — Pido la palabra.

Quise exponer la inquietud que me embargaba de que la primera parte de este artículo podría desviar la orientación de la ley. Se me dijo de que con el agregado que se proyecta para el artículo siguiente, las cantidades acumuladas por el fondo de ahorro quedarían a favor y beneficio del consejo agrario. De manera que el agricultor que hubiera pagado el 3 por ciento en concepto de arriendo, como con el fondo de ahorro tendría 4 por ciento depositado, siempre habría, en total, una suma de pago lo suficientemente acentuada para que fuera una garantía. Hago notar que el artículo de fondo de ahorro, que es el 37, no establece un 4 por ciento fijo, sino hasta el 4 por ciento, y además el artículo 38 agrega que si los resultados de la explotación anual del predio no permitieran, a juicio del consejo, el cobro de esa suma, podrá exonerarlos de ese pago. Y como evidentemente el colono que desista de ser propietario será porque las condiciones de explotación no le permiten aspirar a aquella situación, por hipótesis habrá desaparecido para este colono el fondo de ahorro.

De manera que probablemente no habrá tal garantía. En definitiva, la ley permitirá que puedan presentarse candidatos para utilizar la ley como de colono arrendatario y no de colono adquirente.

Sr. Horne. — Pido la palabra.

Como tengo entendido que no hay número para votar y está terminada, en mi concepto, la discusión de este asunto, se votará en la

sesión del martes, en que corresponde continuar con la consideración de este despacho.

En nombre de la comisión, que es permeable a todas las iniciativas, me permito solicitar a los señores diputados que tengan observaciones que formular al despacho, que tengan la deferencia de presentar las observaciones a la comisión para evitar que se esté improvisando en la forma en que la Cámara lo ha hecho esta tarde, aunque debo reconocer que las modificaciones que se han introducido lejos de alterarlo, lo han mejorado en algunos aspectos.

En nombre de la comisión, solicito, pues, a todos los diputados que tengan observaciones

que hacer, nos la presenten en la comisión para que ésta considere todas las iniciativas.

Sr. Lazo. — Pido la palabra.

Complementando la indicación del señor diputado, haré la sugestión de que los presidentes de bloques se pongan de acuerdo, a fin de que en la sesión del martes próximo se considere este despacho hasta terminar.

Sr. Presidente (Kaiser). — No se puede resolver nada, señor diputado.

Queda levantada la sesión.

—Era la hora 21 y 20.